

PARTE II: ÁREA DE DDR

Capítulo I: Desmovilizados: víctimas y causas de inseguridad

Juan Camilo Munévar. Experto
Enzo Nussio. Consultor

Capítulo II: Implementación de la Política Nacional de Reintegración por parte de los gobiernos regionales y locales

Gustavo Villegas. Consultor

Desmovilizados: víctimas y causas de inseguridad. Estudio de caso sobre el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba

Contenido

I. Introducción

- 1. Metodología
- 2. Delimitaciones y limitaciones de la investigación
- 3. Caso de estudio
- 4. Estructura del informe

II. Desmovilizados: Víctimas y causas de inseguridad?

III. Caso de estudio: municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba

I. Un contexto de inseguridad

- 1.1. Potenciales generadores de inseguridad
- 1.2. Dinámicas de control y confrontación de los actores en el período de post-desmovilización
- 1.3. Efectos de las dinámicas de control y confrontación de actores armados

2. Inseguridad para los desmovilizados

3. Desmovilizados frente a la inseguridad

- 3.1. Protección del Estado
- 3.2. Traslado
- 3.3. Regreso a la ilegalidad
- 3.4. Aislamiento y compromiso con el proceso de reintegración

IV. Conclusiones

Apéndices

Mapa 1: Presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Córdoba 2005

Mapa 2: Evolución de la presencia de las bandas emergentes en el sur de Córdoba 2006-2008

Mapa 3: Traslado de desmovilizados del Centro de Servicio de Tierralta a otros Centros de Servicio

Mapa 4: Traslado de desmovilizados al Centro de Servicio de Tierralta

Mapa 5: Actividad armada por grupos/bandas emergentes, narcotráfico, rearme y ejércitos privados, a nivel nacional

I. Introducción

La situación de inseguridad que viven los desmovilizados colectivos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en algunas regiones se ha constituido en un obstáculo para el proceso de reintegración a la vida social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). En sus lineamientos de política, publicados en diciembre de 2008, la ACR reconoció que la mayoría de zonas donde se han asentado los participantes del programa, no cuentan con condiciones óptimas de seguridad¹. Entre 2004 y abril de 2009, la ACR reportó la muerte de más de 1.700 miembros de las AUC (la mayoría de manera violenta²), de los más de 31.600 que se desmovilizaron colectivamente entre 2003 y 2006. Aunque esta cifra representa sólo el 4% de la población desmovilizada, el incremento de casos que se ha venido observando, en especial en algunas zonas con alta concentración de desmovilizados, es actualmente objeto de análisis debido a las características de la población.

A pesar de los esfuerzos de la ACR por coordinar acciones con la Policía Nacional para mitigar los factores de inseguridad - externos a su competencia³- la situación de seguridad de algunos desmovilizados sigue requiriendo atención prioritaria por parte de las instituciones gubernamentales y de la fuerza pública. Dos tendencias son claras: por un lado, los excombatientes están siendo afectados, tanto a nivel individual como colectivo, por las dinámicas de violencia en sus zonas de asentamiento; y por otro, un número minoritario pero significativo de desmovilizados habría reincidido en actividades delictivas y de violencia en estas zonas. Sin embargo, las dificultades para hacer seguimiento y medir de manera objetiva la relación que existe entre ambas tendencias, ha resultado en un déficit de informes y aproximaciones analíticas al respecto.

Conscientes de las limitaciones y de los riesgos que implica la investigación sistemática sobre las causas y los efectos de la situación de seguridad de los desmovilizados, el Área de DDR del Observatorio, ha elaborado una primera aproximación analítica al respecto. El siguiente informe busca, con base en información cualitativa, explorar las repercusiones que está teniendo la inseguridad en el período post-desmovilización (2006-2009) sobre la población desmovilizada de la AUC, de tres maneras: (1) establecer los factores de violencia que pueden generar inseguridad en la población desmovilizada; (2) establecer qué tipo de mecanismos utilizan los desmovilizados para hacer frente a las situaciones de inseguridad a las que se ven expuestos; y (3) determinar si los mecanismos utilizados (el traslado

o la incorporación a las bandas emergentes, por ejemplo) implican un riesgo de que los desmovilizados dejen el programa de reintegración o pasen a formar parte de las bandas emergentes u otros actores criminales.

I. Metodología

Teniendo en cuenta la dificultad para medir de manera objetiva el fenómeno, el presente estudio utiliza una metodología cualitativa⁴, buscando establecer la percepción compartida de varios grupos de entrevistados sobre las causas y los efectos de la inseguridad en el comportamiento de la población desmovilizada. Para ello, se establecieron siete grupos de personas que pudieran tener una opinión calificada sobre el sujeto de investigación: (1) autoridades vinculadas al proceso de reintegración, (2) participantes del proceso de reintegración, (3) desmovilizados que han reincidido en el delito y se encuentran reclusos en instituciones penitenciarias, (4) observadores nacionales e internacionales del proceso, (5) personal de la ACR responsable de la atención a desmovilizados, (6) familiares de los participantes en el proceso, y (7) miembros de las comunidades receptoras de desmovilizados⁵.

La escogencia de los grupos se hizo bajo el criterio de la representatividad y en cada uno de ellos se buscó tener un balance entre los entrevistados. Cada grupo se conformó con cinco integrantes, permitiendo evaluar, de manera preliminar, la existencia de percepciones compartidas al interior de cada grupo en un tiempo limitado. Cada grupo incluyó criterios específicos: se buscó que el de los participantes, así como el de los familiares y el de la comunidad, incluyeran personas tanto del área rural como de la cabecera municipal; el personal de la ACR se dividió en diferentes especialidades; el grupo de los desmovilizados que han reincidido en el delito se escogió con base en la disponibilidad de su disponibilidad dentro de las instituciones carcelarias en las que se encuentran reclusos para las entrevistas.

Se establecieron límites al nivel de análisis. En primer lugar se decidió circunscribir la investigación a una unidad geográfica - un municipio específico, en este caso - a fin de asegurar un conocimiento más detallado de la situación por parte de los entrevistados y de descartar factores externos que pudieran sesgar el resultado.

La captura de la información se hizo de manera inductiva. Cada miembro de los grupos focales fue entrevistado a profundidad individualmente, de manera semi-estructurada⁶, solicitándoles

elaborar respuestas a tres preguntas abiertas a fin de evitar sesgos metodológicos: ¿Cuál es o cuáles son las principales causas de la inseguridad para los desmovilizados? ¿Qué hacen los desmovilizados en caso de sentirse amenazados? ¿Se están convirtiendo en fuentes de inseguridad los desmovilizados para otros desmovilizados y para la comunidad? Con base en las respuestas generales se propusieron contrapreguntas que ayudaran a calificar y ejemplificar las dinámicas descritas.

El proceso de sistematización de los datos se hizo en tres etapas. Las anotaciones hechas durante las entrevistas se clasificaron en tres secciones de acuerdo a las preguntas iniciales. En una segunda etapa, se establecieron las categorías de acuerdo con los patrones de las respuestas mencionadas por los diferentes grupos, y se re-clasificaron las notas en cada una de éstas. Con base en esta categorización se intentó establecer: (1) la frecuencia de las respuestas y su concordancia con las respuestas de otros grupos, (2) la relación entre las diferentes categorías mencionadas y (3) las sub-categorías, explicaciones y ejemplos que caracterizan a cada una de las categorías mencionadas. El resumen de estos resultados se presentará en cada una de las secciones a continuación.

El análisis de los datos se basó en la explicación y validación de los fenómenos descritos en los resultados por medio de diferentes fuentes. En primer lugar, se utilizaron los datos estadísticos proporcionados por la ACR y otras instituciones, para contrastar las tendencias descritas por los diferentes grupos entrevistados. También se trató de analizar las respuestas de los entrevistados a la luz de la situación y dinámica del conflicto y el orden público en la región, para verificar la existencia de elementos de concordancia. Finalmente, se utilizaron elementos teóricos a fin de explicar la escogencia de ciertos mecanismos por parte de los desmovilizados para hacer frente a una situación de inseguridad.

2. Delimitaciones y limitaciones de la investigación

Para la recolección de datos, se establecieron definiciones operacionales a los principales conceptos de estudio. El concepto de inseguridad se limitó a la percepción de un riesgo extraordinario contra la integridad física⁷, dejando de lado conceptos más amplios, como el de seguridad humana, que incluye nociones de seguridad económica, jurídica y ambiental, entre otras⁸. Sin embargo, estas delimitaciones conceptuales resultaron complejas de establecer para los entrevistados, quienes en ocasiones mostraron dificultad para atribuir la manera de actuar de los

desmovilizados a un solo factor – el de la seguridad. Varias de las personas consultadas, por ejemplo, relacionaron el regreso a la ilegalidad de un número minoritario de desmovilizados a la falta de empleo, las amenazas y la ambición personal.

El muestreo de los diferentes grupos entrevistados se hizo de manera selectiva, priorizando un número pequeño de personas con conocimiento especializado sobre la situación de seguridad y el comportamiento de los desmovilizados en el municipio seleccionado. Esto permitió que las observaciones de cada entrevistado fueran trianguladas con las respuestas de otros miembros de su grupo, así como con las respuestas de miembros de otros grupos. Sin embargo, es probable que muestras mayores de cada uno de los grupos pudieran ofrecer clarificación sobre algunas de las categorías desarrolladas en este informe, permitiendo un mayor nivel de saturación; también se podría aplicar otros tipos de encuesta a muestras estadísticamente significativas que validaran algunos de los resultados aquí presentados.

Finalmente, la información estadística y de fuentes secundarias disponible para el proceso de valoración de los resultados fue limitada. No fue posible obtener cifras confiables sobre la participación de los desmovilizados en las actividades de la ACR para fechas anteriores a julio de 2008. Igualmente, sólo se contó con cifras anuales de muertes y capturas de desmovilizados, lo cual dificultó el análisis del comportamiento de los desmovilizados en los meses con altos registros de violencia. Debido a estas limitaciones, y con el propósito de enriquecer el análisis, se incluyeron estimativos y aproximaciones con base en datos de fuentes secundarias que ayudaran a llenar el vacío de información primaria disponible.

3. Caso de estudio

La selección del municipio de estudio se hizo con base en cuatro criterios: (1) una población significativa de desmovilizados, (2) altos niveles de inseguridad, (3) afectación a la población desmovilizada, y (4) viabilidad logística.

1. Tamaño de la población: Como primera medida se identificaron los 20 municipios con el mayor índice de población desmovilizada y se priorizaron aquellos que cuentan aproximadamente con entre 30.000 y 100.000 habitantes.

2. Niveles de inseguridad: Se identificaron municipios con altos niveles de inseguridad, que incluyeran tasas de homicidios x 100.000 habitantes

por encima del promedio departamental; incrementos en el número de homicidios desde 2005; presencia de bandas emergentes, grupos guerrilleros o organizaciones de crimen organizado; y desplazamiento forzado.

3. Afectación a la población desmovilizada: Se identificaron municipios con casos de homicidios, amenazas y reclutamiento de desmovilizados, según informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

4. Viabilidad logística: Presencia de un Centro de Servicio de la Alta Consejería para la Reintegración.

Los dos municipios, a nivel nacional, que mejor se ajustaron a los requisitos fueron Cauca (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). Se escogió el municipio de Tierralta por sus facilidades logísticas.

4. Estructura del informe

El informe está dividido en dos secciones. La primera busca enmarcar el contexto general; describe la situación de seguridad en las zonas con mayor población desmovilizada a nivel nacional y pone de manifiesto la posible participación de algunos desmovilizados en grupos generadores de violencia. Basándose en informes oficiales y de organismos internacionales sobre las dinámicas del conflicto en estas zonas, esta sección analiza de manera general la afectación, en especial aquella generada por la presencia de bandas emergentes, de la población civil en general y la población desmovilizada.

La segunda sección se divide en tres partes a fin de presentar un análisis detallado de las posibles causas y efectos de la inseguridad sobre la población desmovilizada del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba. A manera de introducción, se presentan las dinámicas generales de inseguridad en el departamento y en el municipio, prestando especial atención a la presencia de las bandas emergentes, la evolución de sus características, su expansión y su afectación a la población civil en general.

Habiendo presentado el panorama general, las dos siguientes sub-secciones presentan los resultados de la investigación respecto a las fuentes de inseguridad para la población desmovilizada y los mecanismos que utilizan los desmovilizados para hacer frente a esta situación. Adicionalmente, se aborda el tema de los efectos de cada uno de los mecanismos frente a

la continuidad de los desmovilizados en el programa de reintegración y el potencial riesgo de convertirse en una fuente de inseguridad.

II. Desmovilizados: ¿Víctimas y causas de inseguridad?

La concentración de la población desmovilizada de manera colectiva en zonas con altos niveles de inseguridad está teniendo efectos negativos en cuanto al desarrollo del proceso de reintegración. Los efectos positivos que tuvo inicialmente la desmovilización en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad en antiguas zonas de control paramilitar, han ido disminuyendo marginalmente⁹. Muchos de estos municipios siguen inmersos en las dinámicas del conflicto y del narcotráfico, afectando tanto a la población civil como a la población desmovilizada. El incremento en las amenazas, los homicidios y el reclutamiento de excombatientes por parte de bandas emergentes en estas zonas se han convertido en un factor de riesgo para el proceso de reintegración.

La mayor concentración de población desmovilizada se encuentra en algunos departamentos de la costa Caribe y Antioquia. El 60% se distribuye de la siguiente manera: Antioquia (29%), Córdoba (14%), Cesar (9%) y Magdalena (8%)¹⁰. En lo referente a los municipios, los primeros lugares los ocupan las capitales departamentales y zonas urbanas intermedias como Medellín, Montería, Valledupar, Santa Marta, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Barrancabermeja, Bello, Villavicencio y Sincelejo con un 37% de la población desmovilizada, seguidas por municipios de menor tamaño en zonas semi-rurales como Tierralta, Apartadó, Turbo, Cauca, Puerto Boyacá, San Pedro de Urabá, Tarazá, Necoclí y Valencia que concentran un 13% de los desmovilizados del país¹¹.

Estas zonas se han caracterizado por sus dificultades de orden público. De los 20 municipios con mayor número de desmovilizados, un 85% cuenta con presencia de bandas emergentes¹². La mayoría de éstos estarían situados en lo que la MAPP/OEA ha denominado como “corredor crítico de afectación”, ubicado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander, César y Norte de Santander; entre otros, donde las condiciones de seguridad de las comunidades, de los desmovilizados y de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, se habrían visto comprometidas como consecuencia de la presencia de bandas y otros actores armados¹³.

En las ciudades capitales e intermedias con alta población desmovilizada, se observa en general una

mejora en cuanto al número de homicidios a partir del fin de la desmovilización. Sin embargo, la mayoría también registran picos en este indicador, relacionados con enfrentamientos entre bandas emergentes por el control de zonas. Por ejemplo, el aumento del 33% en el número de homicidios en Medellín entre 2007 y 2008, se da en el marco de la disputa territorial entre bandas ligadas a la Oficina de Envigado y estructuras provenientes de Urabá lideradas por Daniel Rendón, alias "Don Mario"¹⁴. En Santa Marta se evidenció un caso similar entre 2006 y 2007, cuando el número de homicidios se incrementó en un 20% en la medida que las bandas lideradas por Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias "Los Mellizos", intensificaron sus esfuerzos por posicionarse en la zona¹⁵.

Por otro lado, en las zonas rurales de alta concentración de desmovilizados, se ha observado una tendencia al incremento gradual en el número de homicidios desde el 2005. En municipios como Caucasia se pasó de 20 homicidios en 2005 a 68 en 2008, al igual que en Tarazá donde se incrementaron de 24 en 2005 a 46 en 2008¹⁶. Estos municipios antioqueños, situados en corredores estratégicos para el cultivo de coca y el transporte de estupefacientes, y donde la fuerza pública ha tenido dificultades para consolidar su presencia, se han convertido en zonas de presencia continua de bandas emergentes¹⁷.

La afectación a la población civil en estas zonas también se ha manifestado en picos de desplazamientos forzados. El incremento de la violencia en el 2007 en Santa Marta, por ejemplo, resultó en un incremento del 141% en el número de desplazados, llegando a un total de más de 11.100 expulsiones durante ese año¹⁸. En el 2007 se registró un caso similar en el municipio de Valencia, cuando la ofensiva de la fuerza pública contra las bandas emergentes y las FARC y la intensificación de la erradicación de cultivos ilícitos contribuyeron a un incremento del 129% en el número de desplazados, llegando a 1.146 casos ese año¹⁹.

Las bandas emergentes también han establecido prácticas de control poblacional en sus zonas de operación. Durante el primer semestre de 2008, la MAPP/OEA reportó restricciones a la movilidad de la población en el Bajo Cauca antioqueño, así como amenazas a líderes comunitarios – en especial de población desplazada – en Cartagena, Barrancabermeja y zonas del Magdalena Medio y el sur de Bolívar²⁰. A su vez se han registrado casos de reclutamiento de menores por parte de las bandas emergentes, en zonas como Medellín (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander)²¹. Adicionalmente, de los 20 municipios con mayor población desmovilizada, cuatro han sido

catalogados como de riesgo extraordinario y tres como de alto riesgo para las víctimas dentro del proceso de Justicia y Paz²².

Tabla 1. Afectación a la población civil en municipios de alta población desmovilizada

Municipio	% de la Población Desmovilizada	Presencia de BACRIM (2008)	N° de desplazados expulsados			N° de homicidios		
			2006	2007	2008	2006	2007	2008
Medellín	11%	SI	1027	1576	1293	709	654	871
Valledupar	5%	SI	2088	2205	1691	81	152	103
Montería	5%	SI	337	420	335	56	73	97
Santa Marta	4%	SI	4598	11116	8514	162	194	143
Bogotá	3%	SI	719	849	751	1372	1351	1341
Tierralta	3%	SI	1717	2822	2981	46	60	51
Barranquilla	2%	No confirmado	334	364	308	392	348	325
Caucasia	2%	SI	265	326	369	19	25	68
Cúcuta	2%	SI	823	1033	595	410	452	352
Pto. Boyacá	2%	SI	212	333	231	21	31	23
Turbo	2%	SI	1162	2035	1233	79	78	83
Necoclí	1%	SI	319	451	343	11	10	14
Apartado	1%	SI	1768	1388	1012	27	63	56
S. Pedro de Urabá	1%	SI	261	272	338	7	6	14
Barrancabermeja	1%	SI	1598	1615	956	85	59	88
Sincelejo	1%	No confirmado	332	377	172	46	42	42
Taraza	1%	SI	808	917	442	43	41	46
Bello	1%	SI	147	178	159	104	112	80
Valencia	1%	SI	500	1146	822	4	6	32
Villavicencio	1%	No confirmado	630	560	359	164	134	150

Datos: Alta Consejería para la Reintegración, Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia, MAPP/OEA

Procesado: CITpax

Si bien la situación de inseguridad es generalizada en estas zonas, la población desmovilizada se ha visto especialmente afectada. El incremento en el número de muertes de desmovilizados en estas regiones, la mayoría por homicidios, se ha convertido en un factor de preocupación. Entre 2005 y 2006, esta dinámica respondió en su mayoría a la intención de algunos mandos medios de las AUC de reconfigurar estructuras, así como a ajustes de cuentas y a riñas entre desmovilizados por problemas personales²³. Según cifras de la ACR, el número de muertes de desmovilizados se incrementó de 194 en 2005 a 537 en 2006²⁴. Durante el 2007 se registraron 591 muertes, con especial concentración en municipios como Barranquilla, Santa Marta y Aguachica²⁵, a raíz de las disputas por control territorial entre bandas emergentes. A pesar de registrarse un descenso a 437 muertes en el 2008, el número siguió aumentando en los departamentos de Antioquia y Córdoba como consecuencia de los enfrentamientos entre bandas²⁶.

En este sentido, el proceso de transformación de las bandas emergentes ha sido un factor determinante en el nivel de afectación a la población

desmovilizada. Según cifras oficiales, de las 33 bandas identificadas en el 2007 se han desarticulado casi un 70% principalmente como resultado de las operaciones de la fuerza pública y de su absorción por parte de estructuras mayores²⁷. Este proceso de transformación de pequeñas bandas con ingerencia local a estructuras regionales con proyección regional, ha generado cambio de liderazgos, nuevas rivalidades y enfrentamientos que han puesto a la población desmovilizada en riesgo. Un ejemplo de esta dinámica se evidenció entre 2007 y 2008 en la costa Atlántica, donde la banda de Los 40, que había heredado algunos de los territorios del Bloque Norte fue desarticulada como resultado de la captura de sus principales cabecillas, para luego ser cooptada por la estructura de Los Mellizos, y posteriormente por la banda de Los Paisas²⁸. Fuentes oficiales afirman que esta tendencia de articulación podría continuar hasta llegar a la consolidación de unas pocas estructuras macro regionales que aglutinen una red de bandas menores alrededor de los principales ejes de movilidad en la costa Pacífica, los Llanos Orientales, la costa Atlántica, y el nororiente²⁹.

La alta capacidad de reconfiguración de las bandas es también un tema que requiere mayor atención y estudio. En el 2006, la fuerza pública estimó, de manera general, que el total de las bandas tendría alrededor de 4,000 integrantes³⁰. Luego de más de 6.088 capturas entre 2006 y junio de 2009 - muchos de los cuales no han podido ser procesados judicialmente por falta de pruebas - se estima que las bandas aún cuentan con más de 3,700 hombres armados, dando cuenta de su habilidad para reclutar nuevos miembros y reconstituirse³¹. Adicionalmente, la captura de casi 50 cabecillas desarticuló las estructuras de mando de las primeras bandas que surgieron después de la desmovilización, pero también ha dado paso al surgimiento de una nueva generación de cabecillas de más bajo perfil que buscan establecerse como nuevos comandantes. Este proceso de consolidación de los nuevos comandantes ha sido fuente de fricciones internas en las estructuras, ajustes de cuentas y retaliaciones que, en ocasiones, han repercutido contra la población desmovilizada.

Frente a estos nuevos escenarios de violencia, el reclutamiento de desmovilizados también ha sido constante. Entre 2006 y 2007, la MAPP/OEA reseñó la rápida incorporación de desmovilizados en bandas en Córdoba³², Cesar y Magdalena³³. El crecimiento de algunas estructuras entre 2007 y 2008 intensificó el reclutamiento. A finales de 2007 se evidenciaron reclutamientos forzados en Cesar, Norte de Santander y la región de Urabá³⁴. También se registró el traslado de desmovilizados de algunas zonas para delinquir en otras: de Córdoba hacia la Sierra Nevada, de Bogotá hacia el Tolima y del Bajo Cauca antioqueño hacia el sur de Córdoba³⁵.

La mayoría de los desmovilizados se han negado a regresar a las armas, por lo que muchos han recibido amenazas. En agosto de 2006, la MAPP/OEA registró el desplazamiento de desmovilizados de Norte de Santander a raíz de las amenazas proferidas contra ellos por las Águilas Negras³⁶. Estas amenazas han seguido registrándose, con especial intensidad durante el primer semestre de 2008 en Córdoba, el Bajo Cauca, y el sur de Bolívar³⁷. En agosto de 2008, se registró un atentado con una granada por parte de presuntos miembros de bandas emergentes, a un taller psico-social de la ACR en el que participaban excombatientes en Barrancabermeja.

Teniendo esto en cuenta, existe la preocupación de que un número minoritario pero significativo de excombatientes se haya reincorporado a las bandas emergentes. En enero de 2007, el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, anunció que 4.731 desmovilizados no habían participado en las

actividades de la ACR y por lo tanto no se tenía conocimiento sobre su paradero³⁸. El anuncio generó preocupación pues se pensó que muchos habrían podido pasar a engrosar las filas de las bandas³⁹. Sin embargo, pocos meses después, la ACR reportó haber retomado contacto con por lo menos 3.000 de ellos⁴⁰.

Según estimativos de la Policía Nacional, de los más de 3.700 miembros que se estiman tenían las bandas emergentes a nivel nacional en mayo de 2009, sólo un 15% serían desmovilizados. Entre 2005 y 2009, más de 4.700 desmovilizados⁴¹ han sido capturados por reincidir en el delito, de los cuales 1.060 estaban relacionados con las bandas emergentes⁴². Estas capturas se han concentrado en los departamentos con mayor población desmovilizada como Antioquia, Cesar, Córdoba y Magdalena⁴³.

Tabla 2. Capturas de desmovilizados en operaciones contra las bandas emergentes

	2006	2007	2008	2009
Capturas BACRIM	1014	1943	2163	968
Capturas desmovilizados	1360	1612	868	344
Capturas desmovilizados por BACRIM*	244	349	285	148
% capturas de desmovilizados por BACRIM del total de capturas por BACRIM	24%	18%	13%	15%
% capturas de desmovilizados por BACRIM del total de capturas de desmovilizados	18%	22%	33%	43%

Datos: Alta Consejería para la Reintegración, Policía Nacional
Procesado: CITpax

Adicionalmente, existe la preocupación de que algunos desmovilizados estén delinquiendo mientras participan en el programa de reintegración. Los primeros indicios se observaron en Medellín, cuando el alcalde de la ciudad, Alonso Salazar, afirmó que un 20% de los participantes le estarían “haciendo trampa” al proceso, y estarían ligados al incremento en la tasa de homicidios en la ciudad en 2008⁴⁴. Luego de las declaraciones, el 16 de mayo de 2008, fue capturado John William López, alias “Memín”, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, quien seguía delinquiendo a pesar de estar en el Programa de Paz y Reconciliación⁴⁵. En su informe de febrero de 2009 la MAPP/OEA advirtió que de los 183 desmovilizados capturados

por supuesta participación en bandas emergentes, la mayoría había tenido contacto con la ACR el mes anterior a su aprehensión⁴⁶. Fuentes oficiales también reportaron cómo en mayo de 2008, alias “Alberto”, lugarteniente de Don Mario, habría intentado reclutar desmovilizados en Riosucio (Chocó) con la promesa de que podrían cobrar “doble sueldo”⁴⁷.

III. Caso de estudio: Municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba

I. Un contexto de inseguridad

A pesar de haber sido sede de las negociaciones con las AUC y uno de los territorios emblemáticos en el proceso de desmovilización, una confluencia de factores sigue generando violencia en el departamento de Córdoba, en especial en el municipio de Tierralta. Los principales responsables del incremento en los índices de inseguridad han sido las bandas emergentes que surgieron como resultado de la desmovilización, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos grupos de delincuencia organizada. Las disputas por el control de territorios estratégicos y corredores de movilidad para las economías ilícitas, así como los conflictos por la tenencia de grandes extensiones de tierra y el control político, económico y social siguen nutriendo la inseguridad de la zona.

I.1. Potenciales generadores de inseguridad

• En Córdoba

La geografía del departamento lo ha convertido en un territorio estratégicamente importante para diversos grupos al margen de la ley⁴⁸. Los corredores de movilidad que comunican los municipios del sur del departamento con el Urabá y Bajo Cauca antioqueños, así como con el sur de Bolívar, y las rutas que unen el sur del departamento con los 124 km. de costa en los municipios de Los Córdoba, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero al nordeste, han convertido estas zonas en un lugar de confluencia de grupos criminales⁴⁹. Esto, combinado con la presencia de cultivos ilícitos en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta, ha convertido al departamento en un importante bastión del narcotráfico⁵⁰. Finalmente, la propiedad de las tierras fértiles de los valles de los ríos Sinú y San Jorge⁵¹, muchas de las cuales estarían en manos de sectores ligados al narcotráfico y a los paramilitares como resultado del despojo y el desplazamiento⁵², también se han constituido en motivo de disputa por parte de actores armados que responden a intereses privados⁵³.

Los principales generadores de inseguridad en el departamento son:

- Desde mediados de los años ochenta, las FARC han buscado hacer presencia en el sur del departamento. Durante este periodo se implantó en el departamento el Frente 18, un apéndice del Frente 5 en Urabá y se registró la expansión de los Frentes 35, 36 y 37 en el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca hacia el Nudo de Paramillo. Actualmente hacen presencia los Frentes 5, 18 y 58 en Tierralta y el 36 en Puerto Libertador y Montelíbano⁵⁴.

- Durante los años noventa, los grupos paramilitares implantaron un fuerte control en amplias zonas del departamento. La consolidación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) durante la primera mitad de los noventa y la creación de las AUC en 1997, dio pie para la consolidación de diferentes bloques en la zona. El Bloque Córdoba, liderado por Salvatore Mancuso, estableció su centro de operaciones en Tierralta, pero logró consolidarse en todo el sur y el centro del departamento⁵⁵. El 21 de enero de 2005, en el municipio de Tierralta, 925 miembros del Bloque Córdoba, dejaron las armas.

- El Bloque Héroes de Tolová liderado por Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, empezó a hacer presencia en el departamento en 1999, remplazando a una efímera presencia del Bloque Metro en la zona. El bloque concentró su radio de operación en Valencia y Tierralta⁵⁶. El 15 de julio de 2005, se desmovilizaron 464 de sus miembros en Valencia.

- Además de los dos bloques principales, en el departamento hicieron presencia: el Bloque Elmer Cárdenas, liderado por Fredy Rendón, alias “El Alemán”, en las zonas aledañas al Urabá antioqueño y el Bloque Mineros, comandado por Ramiro Vanoy, alias “Cuco”, en la frontera con el Bajo Cauca⁵⁷. También operó el Frente Rito Antonio Ochoa, vinculado a las estructuras de Rodrigo Mercado, alias “Cadena”, en San Andrés de Sotavento, Chinú, Momil, Purísima y Lorica, en la frontera con el departamento de Sucre.

A raíz de la desmovilización en 2005, han surgido en el departamento bandas emergentes, las cuales han buscado mantener el control que antes ejercían sobre las economías ilícitas y los corredores estratégicos, las autodefensas:

- Durante el primer semestre de 2006 surgieron

dos grupos: “Los Traquetos” en los municipios de Valencia y Tierralta, liderado por antiguos miembros del Bloque Héroes de Tolová que no se desmovilizaron⁵⁸, y el grupo conocido como “Vencedores de San Jorge” en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, liderado por antiguos miembros del Bloque Córdoba⁵⁹. El primero habría contado con entre 60 y 80 hombres y el segundo con alrededor de 25⁶⁰.

- Entre 2007 y 2008 se configuraron dos nuevas estructuras en el departamento que absorbieron a las dos anteriores. Un grupo autodenominado las Águilas Negras hizo su entrada a principios de 2007, y sentó las bases para la consolidación de la estructura actualmente conocida como “Los Paisas” en Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista y Planeta Rica, y en menor medida en Tierralta y Valencia⁶¹. Según fuentes oficiales, éste habría contado con casi 100 integrantes durante el primer semestre de 2008, aumentando su número de efectivos a 170 en el primer semestre de 2009⁶².

- Por otro lado, a finales de 2007 hizo su entrada al departamento la banda liderada por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”⁶³, la cual fue expandiendo su presencia en Valencia, Tierralta, Montería, Los Córdobas y Canalete⁶⁴. Según fuentes oficiales la banda habría contado con alrededor de 100 integrantes durante el primer semestre de 2008, aumentando su tamaño a más de 300 en el 2009⁶⁵.

Adicionalmente a las estructuras armadas, existen en el departamento redes criminales locales dedicadas al cobro informal de deudas, a los juegos de azar y al expendio de drogas en las zonas urbanas⁶⁶. Según informes de prensa, una de estas redes criminales, con focos en los municipios de Cereté, Loricá y Sananero en Córdoba, así como en Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre, estaría liderada por Fabio León Vélez, alias “Nito”, un contacto importante de la llamada Oficina de Envigado y los carteles mexicanos⁶⁷.

- *En Tierralta*

Las amplias extensiones de tierra y los corredores estratégicos hacia Urabá (municipios de Arboletes y San Juan de Urabá), el Bajo Cauca (por la Serranía de San Jerónimo) y hacia Montería, han convertido al municipio de Tierralta en una zona de asentamiento y disputa de estructuras generadoras de inseguridad.

Especial importancia han cobrado los cultivos de

uso ilícito, factor que ha convertido a Tierralta en un territorio estratégico para los grupos al margen de la ley. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cultivo de coca pasó de 842 hectáreas en 2005 a 298 en 2006, gracias a las intensas labores de erradicación de la fuerza pública. Sin embargo, debido al surgimiento de bandas emergentes y la presencia de las FARC en las estribaciones del Parque Paramillo, se incrementó el área cultivada a 340 hectáreas en 2007⁶⁸. En 2008, la Policía Nacional reportó la presencia de 572 hectáreas de coca en el municipio⁶⁹. Las zonas más afectadas incluyen los corregimientos de Crucito, Saiza y Batata que rodean la represa de Urrá.

Además de la presencia de las FARC en las estribaciones del Nudo de Paramillo y de milicianos de esta organización guerrillera en la cabecera municipal, el municipio se ha constituido en zona de asentamiento de grupos paramilitares y de bandas emergentes luego de la desmovilización:

- La importancia estratégica y económica del municipio lo convirtió en un bastión histórico de las autodefensas. Algunas de las bases más conocidas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), como La 24 y La 35, se encontraban en la zona. En el municipio hicieron presencia tres apéndices del Bloque Córdoba: el Frente Abibe y la Escuela Móvil, así como un grupo de milicias en la cabecera municipal lideradas por alias “Juancho”, aún prófugo de la justicia⁷⁰.

- La desmovilización del Bloque Córdoba y del Bloque Héroes de Tolová dio paso al surgimiento de bandas emergentes en el municipio. Luego de la desmovilización del primero en enero de 2005, el segundo incursionó hacia el corregimiento de Crucito en Tierralta a fin de copar estos territorios⁷¹. A finales de 2005 y durante el primer semestre de 2006, se configuró en el corregimiento de Batata - frontera con el municipio de Valencia - el grupo de “Los Traquetos”. Éste buscó expandir su radio de acción hacia el Alto Sinú, especialmente en el corregimiento de Crucito, a fin de establecer control sobre los circuitos del narcotráfico y las cadenas de extorsión en la zona.

- Durante el primer semestre de 2007 se presentó en el municipio la entrada de varios grupos, sin consolidarse en estructuras definidas. Entre los actores mencionados durante este período se encuentran la banda de Los Mellizos, Los Gigantes y las Águilas Negras sin zonas de operación ni estructuras de mando definidas⁷². Según informes de prensa, hombres vinculados a la organización de Los Mellizos, algunos provenientes del Bajo

Cauca y otros pertenecientes al antiguo Bloque Córdoba, habrían operado en las estribaciones del Nudo de Paramillo⁷³.

- Durante el último trimestre de 2007 y el primero de 2008 se consolidaron en el municipio dos estructuras definidas: las Águilas Negras, lideradas por Don Mario, que reclutaron a algunos miembros de Los Traquetos, y concentraron su radio de actuación en los corregimientos de Batata, Crucito y Saiza, colindantes con el municipio de Valencia, por otro lado, el grupo de “Los Paisas” se asentó en los corregimientos de Caramelo, Santa Fe de Ralito y Volador.

1.2. Dinámicas de control y confrontación de los actores en el período post-desmovilización

Al término de la desmovilización, la dinámica de las bandas obedeció a la intención de consolidar su control sobre los negocios ilícitos y a mantener el control de zonas antiguamente dominadas por los Bloques Córdoba y Héroes de Tolová. Los Traquetos lanzaron una serie de ataques selectivos contra personas relacionadas con los proyectos productivos de los desmovilizados, así como contra excombatientes y campesinos involucrados en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos y a personas cercanas a Salvatore Mancuso⁷⁴. Mientras tanto, los Vencedores de San Jorge se concentraron en mantener el control de los circuitos de producción de estupefacientes y el control poblacional en zonas rurales de Puerto Libertador y Montelíbano. Su rápido crecimiento por medio de reclutamientos masivos respondió a la intención de contener el avance de las FARC en la zona⁷⁵.

Durante el primer semestre de 2007, sin embargo, empezó un proceso de transformación de las bandas a nivel nacional que tendría repercusiones importantes en el departamento. La captura y muerte de importantes cabecillas y la decisión de trasladar a los líderes de las AUC a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí⁷⁶, abrió el camino para que algunos mandos medios intentaran articular poderosas bandas, ya no a nivel local, sino con cobertura regional. Los Mellizos absorbieron grupos en la costa Atlántica, Antioquia, César y Norte de Santander, ligados a antiguos comandantes de las AUC como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”. Por otro lado, Don Mario empezó a articular estructuras de su hermano El Alemán y Ever Veloza, alias “H.H.”, en Urabá, expandiendo su presencia hacia Antioquia, Chocó y la Costa Atlántica.

En este marco, se registra la entrada de nuevas bandas emergentes al sur de Córdoba. La rápida respuesta militar contra Los Traquetos y los Vencedores de San Jorge, en el segundo semestre de 2006⁷⁷, los había obligado a replegarse en zonas reclusas del sur del departamento y la frontera con el departamento de Antioquia y a adoptar un perfil bajo, operando de civil y en grupos de menor tamaño⁷⁸. Esta desarticulación parcial, fue aprovechada por hombres del Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca⁷⁹, quienes rápidamente reclutaron a miembros de los Vencedores de San Jorge y Los Traquetos para reconfigurar las bandas en la región.

Durante el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008, los intentos de articulación y expansión por parte de estas nuevas estructuras regionales se tradujeron en un escenario de confrontación. La estructura de Don Mario, quien desde noviembre de 2007 había ingresado al departamento, entró en disputa por el control de corredores estratégicos de movilidad y de circuitos de producción de estupefacientes, con las estructuras ligadas a la Oficina de Envigado y sus apéndices en el Bajo Cauca antioqueño, quienes absorbieron reductos de Los Traquetos y los Vencedores de San Jorge y se autodenominaron Los Paisas.

Cada una de estas estructuras empezó a operar por medio de comisiones y grupos locales con un alto nivel de autonomía en cada zona. La lucha se llevó a cabo en dos frentes: (1) disputas por el control poblacional, resultando en amenazas contra la población civil, y el reclutamiento de excombatientes y jóvenes de la comunidad⁸⁰, y (2) combates esporádicos y el asesinato selectivo de posibles auspiciadores o informantes del bando contrario, especialmente de desmovilizados.

Durante el primer semestre de 2008, se registraron enfrentamientos directos entre las dos estructuras en Tierralta. En marzo y abril de 2008 se enfrentaron en el corregimiento de Palmira, situado en la carretera que conduce de la antigua Zona de Ubicación para las negociaciones con las AUC, a la cabecera municipal y al municipio de Valencia⁸¹. Este eje estratégico para el transporte de estupefacientes se habría convertido en territorio de disputa entre las dos bandas.

De igual manera se registraron retaliaciones entre bandas en otras zonas del departamento. En marzo de 2008, presuntos miembros de una banda emergente abrieron fuego contra un grupo de civiles en la vereda Buenos Aires del municipio de Puerto Libertador entre los que se encontraban miembros de la banda contraria⁸². El hecho desató una serie

de retaliaciones que culminaron con la muerte de cinco personas en la vereda San Daniel en Puerto Libertador, perpetrada por la banda de Don Mario⁸³, y la muerte de seis personas más en noviembre de 2008 en San José de Uré, entre los que se encontraban miembros de la organización de Los Paisas⁸⁴.

Durante los tres últimos trimestres de 2008, la Policía y el Ejército lanzaron una nueva ofensiva contra ambas bandas. Entre los golpes más importantes, se registró en abril de 2008, la captura en Montería de Francisco Javier Silva Vellejo, alias “Julián”, principal cabecilla de Los Paisas, así como de algunos líderes de Los Traquetos, como José Walter Lozano Murillo, alias “El Primo” y Eduardo Mario Galeano, alias “22”, todos bajo órdenes de la cúpula de la Oficina de Envigado en Medellín⁸⁵. De igual manera las autoridades minaron la estructura de mando de la banda liderada por alias “Don Mario”, con las capturas de Luis Alberto del Toro, alias “Galeón”, jefe de comisión en San Pedro de Urabá (Antioquia) en abril de 2008, de Teobaldo Díaz, alias “Lenteja”, líder de la comisión en San Juan de Urabá, en Montería en junio de 2008, y de Manuel Arturo Salóm, alias “JL”, jefe de finanzas de la organización, en octubre de 2008 en San Pedro de Urabá (Antioquia).

En Tierralta, los operativos se extendieron hasta finales de 2008 con la incautación de un amplio material de guerra y un número importante de combatientes. Entre los más significativos, se reportaron en octubre de 2008 la captura de Edwin Zambrano Pinto, desmovilizado del Bloque Córdoba y mando medio de las Águilas Negras en el municipio, y el hallazgo de una caleta con munición y dinero perteneciente a la estructura de Don Mario⁸⁶.

La desarticulación de Los Paisas ayudó a una pasajera consolidación de las estructuras de Don Mario en gran parte del municipio de Tierralta. La captura, en abril de 2008, de Salomón Feris Chadid, “alias 08”, quien se había aliado con Los Paisas y mantenía el control de la zona noroccidental del municipio, permitió que las Águilas Negras – quienes durante un corto período adoptaron el nombre de Autodefensas Gaitanistas – avanzaran hacia esta zona y consolidaran su control territorial⁸⁷. Así mismo, las disputas iniciales entre la organización de Don Mario y los frentes de las FARC – en especial el 58 – presentes en la región, dieron paso a una relación de negocios en la que los guerrilleros venden la pasta de coca a ambas bandas para su procesamiento en laboratorios en el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca⁸⁸.

A raíz de la consolidación de las Águilas Negras, las disputas por corredores estratégicos se han

trasladado a otros municipios. Durante el primer semestre de 2009, la banda de Los Paisas se habría reforzado con apoyo de Los Rastrojos, otra banda emergente con presencia en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, entre otros⁸⁹. Esto parece haber generado un cambio en las dinámicas de confrontación: si bien continúan las disputas por los territorios de la Serranía de San Jerónimo al sur del departamento, se han registrado altercados en municipios como San Pelayo, San Antero, Lórica, y Puerto Escondido que conducen a la zona costanera al norte del departamento⁹⁰. No obstante, fuentes oficiales señalan que la captura de Don Mario, el 15 de abril de 2009, habría generado tensiones al interior de la organización por su posible sucesión, lo cual habría frenado su proceso de expansión⁹¹.

1.3. Efectos de las dinámicas de control y confrontación de actores armados

Las dinámicas de confrontación y control de las bandas emergentes y los grupos al margen de la ley se han reflejado en un incremento en el número de homicidios en el departamento. La desmovilización de las AUC tuvo inicialmente un efecto positivo en cuanto a los indicadores de seguridad del departamento. Durante el 2005, se registró una reducción del 24% comparado con el 2004, pasando de 230 a 173 homicidios⁹². Sin embargo, durante el 2006 se evidenció un alza a 258 homicidios en el departamento, siendo Montelíbano, Tierralta y Montería – zonas de operación de Los Traquetos y los Vencedores de San Jorge – los municipios más afectados⁹³.

Nuevas alzas en el número de homicidios se registraron a medida que las bandas se reconfiguraron. En el 2007, hubo un nuevo aumento del 36% pasando a 352 homicidios a nivel departamental. Los incrementos en los municipios de Ayapel (114%), y en Puerto Libertador (238%) dan cuenta, entre otros factores, de la entrada de grupos del Bajo Cauca antioqueño. Por otro lado, las disputas entre bandas en Montería y Tierralta contribuyeron al aumento de los homicidios en ambos municipios⁹⁴. Durante el 2008, período de mayor intensidad en la disputa entre Los Paisas y Don Mario, el número de homicidios incrementó a 466 (un aumento del 32%). Los municipios más afectados por esta ola de violencia fueron Valencia, Lórica, San Antero y Puerto Escondido⁹⁵.

Las modalidades de los homicidios dan cuenta de la influencia de las bandas en el departamento. El incremento del sicariato y el uso de armas cortas coinciden con el tipo de tácticas que privilegian las

bandas emergentes⁹⁶. A pesar de no contar con cifras oficiales sobre los antecedentes judiciales de los muertos, se cree que el 60% de los asesinatos habrían sido perpetrados por motivos relacionados con la delincuencia organizada, mientras un 33% estaría relacionado con otras causas, incluyendo riñas callejeras, o motivos personales, entre otros⁹⁷.

En Tierralta, el número de homicidios ha aumentado casi de manera constante desde el fin de la desmovilización. Los picos de homicidios han coincidido con los intentos de control por parte de las bandas emergentes. Entre junio y julio de 2006, se registraron 9 homicidios, varios de personas ligadas a los procesos de erradicación manual o con vínculos con el Bloque Córdoba⁹⁸. En noviembre de 2007, fecha de entrada de la estructura de Don Mario en el municipio, se incrementó el número de homicidios a 12. Finalmente, en el 2008, a pesar de registrarse una leve mejora en el total anual de homicidios, se registraron 15 homicidios en el mes de enero, la cifra mensual más alta desde el 2006, la mayoría de los cuales se perpetraron en barrios de la cabecera municipal y sus víctimas serían excombatientes, como consecuencia de los enfrentamientos y retaliaciones entre bandas⁹⁹.

Así mismo, la disputa por el control territorial de corredores estratégicos y los beneficios de la tenencia de grandes extensiones de tierra, han resultado en flujos constantes de desplazamiento forzado en el departamento. Entre 2004 y 2005 se dio un incremento de 4.000 a 6.482 desplazados, cifra que se mantuvo estable en 2006 (6.561 expulsiones). Sin embargo, la llegada de nuevas estructuras y sus subsiguientes disputas, resultaron en un incremento del 20% entre 2006 y 2007 y de casi un 30% entre 2007 y 2008. Los municipios más afectados fueron: Tierralta, el cual ha visto un incremento constante en el número de expulsados desde 2005; Montelíbano, Puerto Escondido y Valencia han tenido períodos cortos de disminución en el número de expulsiones entre 2006 y 2008, sin limitar la tendencia creciente del fenómeno¹⁰⁰.

Esto se suma a la violencia selectiva contra líderes de población desplazada. Luego de haber abandonado masivamente sus parcelas, y a pesar de no tener títulos, pequeños grupos de población desplazada han intentado reclamar sus derechos de propiedad en algunos territorios¹⁰¹. Sin embargo, el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de población desplazada en enero de 2007 en Montería, y el de Ana Isabel Gómez, en el municipio de Los Córdoba en abril de 2009, pusieron de manifiesto la intención, de intereses ocultos, de acallar las denuncias¹⁰². El incremento en

los allanamientos de propiedades de antiguos jefes de las AUC en el departamento como resultado de declaraciones de informantes, incrementan el riesgo de retaliaciones contra miembros de la comunidad, y contra los desplazados en especial¹⁰³.

El número de desplazados también ha aumentado en Tierralta, en el marco de los enfrentamientos entre las bandas emergentes. Aunque el número de desplazados viene en aumento desde el 2005, los principales incrementos se vieron en el 2006 y el 2007¹⁰⁴. En junio de 2008, se desplazaron 29 familias guardabosques de la vereda Murmullo Medio en el corregimiento de Batata, luego de la muerte de uno de los líderes comunitarios a manos de un grupo no identificado. En la zona han empezado a hacer presencia Las Águilas Negras. Así mismo, en febrero de 2008, en la vereda el Loro, colindante con la zona urbana del municipio, se registró el desplazamiento de 90 familias luego de enfrentamientos entre dos bandas emergentes.

2. Inseguridad para los desmovilizados

Con el fin de examinar las principales fuentes de inseguridad para los desmovilizados en el municipio de Tierralta, se le preguntó a cada uno de los miembros de los grupos focales: ¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad para los desmovilizados? Con base en las respuestas de los entrevistados, se exploró un grupo de contra-preguntas buscando clarificar la percepción de los participantes con respecto a las características de las amenazas, y por qué los grupos armados estarían especialmente interesados en afectar a la población desmovilizada. Finalmente se les pidió ejemplificar sus respuestas.

• Principales observaciones

Sólo un número minoritario de desmovilizados habría sido amenazado de manera directa: Todos los entrevistados coincidieron en señalar que sólo un número minoritario de desmovilizados habría recibido amenazas directas por parte de las bandas emergentes; ninguno de los participantes ni de sus familiares reconoció haber recibido amenazas a su integridad física. No obstante, tanto los participantes como sus familiares advirtieron que la mayoría de los desmovilizados se sienten amenazados de manera indirecta como consecuencia de los asesinatos y el reclutamiento de desmovilizados, especialmente entre 2007 y 2008.

Las amenazas provienen de las bandas emergentes: Todos los grupos entrevistados coincidieron en señalar a las bandas emergentes como la principal

fuelle de inseguridad para los desmovilizados en Tierralta. Dependiendo de su zona de residencia, la mayoría de los entrevistados, en especial los miembros de la comunidad, los desmovilizados y sus familiares, identificaron el nombre de las estructuras que operan en la región y su nivel de influencia: en la cabecera municipal operan las Águilas Negras vinculadas a la organización de Don Mario; en la zona nor-occidental del municipio (Palmira, Santa Fe de Ralito, Santa Marta y Caramelo) se hizo referencia a la presencia anterior de Los Paisas y Los Traquetos, recientemente remplazados por las Águilas Negras; en la zona norte del municipio, colindante con el municipio de Valencia (Los Morales y Volador) la identificación es con el grupo de los Urabeños – otra de las denominaciones utilizada por miembros de las estructuras de Don Mario - de manera menos visible; en la zona sur-oriental (Batata y Crucito) se identifica a las Águilas Negras como el principal actor.

Las bandas emergentes en Tierralta están compuestas por mandos medios y combatientes de las AUC que no se desmovilizaron y desmovilizados que han reincidido en el delito: En general, los grupos manifestaron que a raíz de las luchas entre diferentes estructuras y la captura de las cabezas más visibles en el municipio, se ha vuelto cada vez más difícil identificar las líneas de mando. Sin embargo, los participantes del proceso, especialmente aquellos que pertenecieron a bloques de las autodefensas que operaron en la zona (Bloque Córdoba y Bloque Héroes de Tolová), dijeron conocer a algunos comandantes, o “cuchos”, que lideran a las Águilas Negras y Los Paisas en diferentes zonas del municipio¹⁰⁵. Según ellos, éstos son, en su mayoría, mandos medios de las antiguas autodefensas que no se desmovilizaron, y algunos desmovilizados que han reincidido en el delito. Esta visión contrasta con la de un número minoritario de las autoridades y de los observadores, quienes opinan que ha habido un recambio en las líneas de mando, ya que aquellos ligados a las AUC están siendo remplazados por personas ligadas a la delincuencia organizada y al narcotráfico, que no son conocidos por la población en general.

La dificultad para identificar a los miembros de las bandas no permitió establecer un consenso claro respecto a su composición. Para la mayoría de los participantes del proceso, los reincidentes y los miembros de la comunidad, las estructuras en el municipio de Tierralta están compuestas en gran medida por desmovilizados y combatientes de las AUC que no se desmovilizaron. Sin embargo, no fue posible inferir si los miembros de las bandas son del municipio o provienen de otras regiones. Según los diferentes grupos, algunos han venido de otras

regiones a “trabajar” en el municipio: Los participantes del proceso y las comunidades hicieron referencia a la llegada de desmovilizados de Urabá (especialmente de Apartadó) y del Bajo Cauca antioqueño a finales de 2007 y principios de 2008. Por otro lado, algunos miembros de la comunidad y de los desmovilizados reincidentes señalaron que durante el segundo semestre de 2006, el primer semestre de 2007, y el primer semestre de 2008, un número significativo de desmovilizados del municipio habría regresado a las filas de la delincuencia, pero se habrían ido a otras regiones.

Las bandas operan de diferentes maneras dependiendo del contexto: Los grupos coincidieron en señalar que las nuevas estructuras operan de diferentes maneras, dependiendo del contexto y de su objetivo estratégico del momento. En las zonas rurales, en especial en los corregimientos del nor-occidente (Batata, Crucito, Saiza) los miembros de la comunidad han visto a las estructuras utilizando uniformes y armas largas. Según uno de los miembros del grupo de las autoridades, las estructuras estarían divididas en grupos de 30 personas en diferentes municipios y corregimientos. En las zonas semi-urbanas, los participantes del proceso y los desmovilizados reincidentes, coincidieron en decir que estos grupos operan vestidos de civil y con armas cortas. Los miembros de la comunidad, los desmovilizados reincidentes y los participantes del proceso, dijeron haber visto a miembros de estas bandas patrullando en los diferentes barrios del municipio, en motocicleta.

La mayoría de desmovilizados reincidentes revelaron que el principal objetivo estratégico de los grupos es mantener control tanto de la población como del territorio en zonas estratégicas (“control de zonas”, según sus términos), ya sean barrios, corregimientos o rutas para el transporte de drogas. Según uno de ellos, esto se logra de varias maneras: por un lado se elimina a las principales amenazas, en especial aquellos de quienes se sospecha estarían colaborando con autoridades o con la banda contraria, y por otro se impone “orden” en la comunidad, dejándoles saber quién es el que manda en la zona.

La afectación de la población desmovilizada incrementa en los periodos de confrontación: los participantes del programa y los desmovilizados reincidentes coincidieron en destacar la mayor afectación en dos circunstancias: (1) la confrontación entre diferentes estructuras, tal como ocurrió durante el 2008, y (2) las ofensivas lanzadas por la fuerza pública contra alguna de las estructuras. Según ellos, al estar bajo la presión de la confrontación, los

grupos estarían asesinando a desmovilizados bajo la mínima sospecha de colaboración con las autoridades o el bando contrario. Esto habría forzado a algunos desmovilizados a unirse a otros grupos o a alejarse de la región. Sin embargo, habiéndose consolidado un solo grupo en la zona, ha disminuido la preocupación por parte de los participantes.

Según los miembros de la comunidad, los desmovilizados reincidentes y los participantes del proceso de reintegración, la manera cómo han sido asesinados los desmovilizados no permite saber a ciencia cierta cuáles fueron los verdaderos móviles de las muertes. De acuerdo con lo descrito por los grupos, la mayoría de las muertes han sido asesinatos cometidos por sicarios en motocicletas con la cara cubierta en la vía pública o en establecimientos en donde se encontraban las víctimas.

La mayoría de los desmovilizados asesinados estaban involucrados en actividades ilegales: Los miembros de la comunidad y los participantes del proceso, tienen la percepción de que los desmovilizados asesinados habrían estado involucrados en algún tipo de actividad ilegal. Sin embargo, tres de los participantes del programa manifestaron conocer casos de compañeros, sobre los cuales recaían pocas sospechas, quienes habrían sido asesinados por "información" que alguien proporcionó sobre ellos. Esto ha resultado en que los participantes perciban que simplemente por ser visto en cierta zona o con cierta persona, en especial con otros desmovilizados, puede constituirse en motivo para ser asesinados por las bandas emergentes.

Esta percepción contrasta con la de los desmovilizados reincidentes quienes destacaron tres razones para asesinar - o "legalizar", según sus propios términos - a un desmovilizado: (1) un número minoritario habría sido asesinado por haber colaborado con el Ejército o la Policía, especialmente en la captura de cabecillas de sus estructuras, (2) un número también pequeño habría sido asesinado por purgas internas al haber colaborado con el bando contrario, (3) y un número mayoritario se habría dado por retaliaciones contra desmovilizados miembros de las bandas contrarias.

No obstante hay poca claridad respecto a quién da las órdenes de cometer los asesinatos. Según dos de los desmovilizados reincidentes, estas órdenes vendrían directamente de los comandantes de zona, quienes obtendrían información a través de una amplia red de informantes. Sin embargo, otros dos de los reincidentes entrevistados coincidieron en decir que algunos combatientes rasos habrían actuado de

manera autónoma, especialmente en los casos de retaliaciones. Miembros de las autoridades, también señalaron que algunos grupos se estarían cambiando de nombre, diciendo en ocasiones que son de la banda contraria, a fin de evitar investigaciones judiciales.

• Valoración de los resultados

Tierralta cuenta con la quinta población más grande de desmovilizados a nivel nacional. El haber sido una de las zonas originarias de las AUC lo convirtió en un centro importante de reclutamiento para bloques en diferentes zonas del país, por lo que luego de la desmovilización, muchos de los desmovilizados decidieron regresar. De los 2.878 desmovilizados asignados a los Centros de Servicios de la ACR en Córdoba en 2008, alrededor del 25% estarían asignados al municipio de Tierralta¹⁰⁶.

El incremento constante en el número de muertes de desmovilizados desde 2005 en el municipio, ha generado preocupación. A pesar de que el número de muertos representa solo un 3% del total de la población, su tendencia ascendente ha coincidido con los intentos de las bandas emergentes de posicionarse en el municipio. En el 2005 se registraron sólo 2 muertes, esta cifra se incrementó a 6 en 2006, 11 en 2007 y finalmente 16 en 2008. Según informes de la ACR de abril de 2008, casi un 90% de las muertes habrían sido víctimas de homicidio relacionado a actividades delictuales, aunque no se descarta que un número minoritario se deba a disputas personales y riñas callejeras¹⁰⁷.

Tabla 3. Muertes de desmovilizados en Córdoba y Tierralta

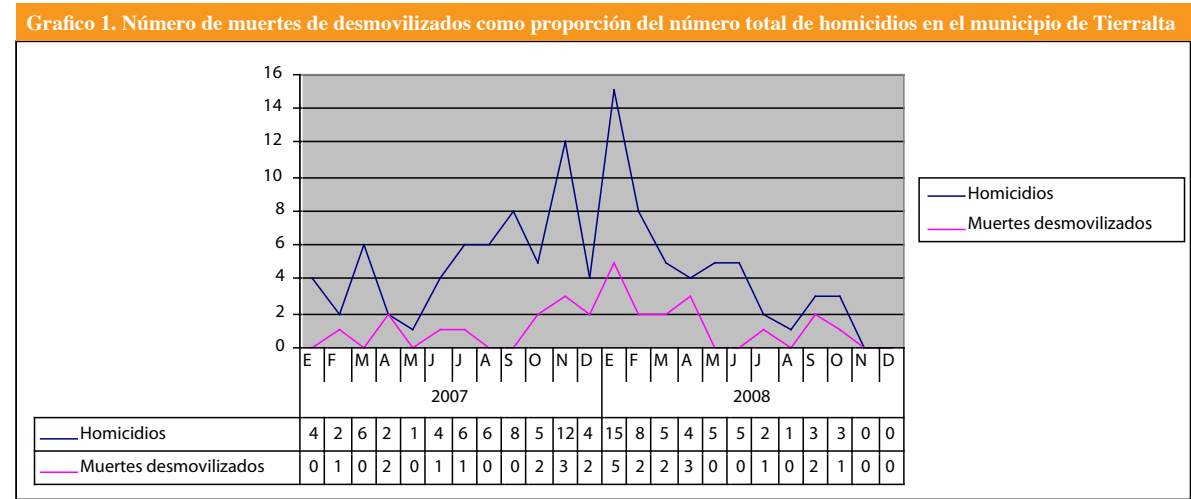
	2005	2006	2007	2008
Población asignada	2290	3660	3730	3783
Muertes en Córdoba	8	13	32	80
Muertes en Tierralta	1	6	11	16

Cifras: Alta Consejería para la Reintegración, Cifras Centro de Servicio de Montería citado en Víctor Negrete, "La Desmovilización", Op. Cit.
Procesado: CITpax

A medida que se han intensificado los enfrentamientos entre bandas, la violencia ha sido cada vez más dirigida hacia la población desmovilizada. En 2005 los homicidios de desmovilizados representaron un 6% del total de los homicidios en el municipio, pasando a representar un 13% en el 2006, y un 23% en 2007. Este incremento coincidió con la entrada de la estructura de Don Mario al municipio.

Esto corrobora las apreciaciones de los participantes del programa, quienes afirman haberse convertido en los principales objetivos militares de las bandas en los momentos de lucha territorial. Entre octubre de

2007 y enero de 2008, las muertes de desmovilizados representaron por lo menos un 30% del total de los homicidios en Tierralta.



Datos: Alta Consejería para la Reintegración (Dic. 2008), Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República
Procesado: CITpax

La violencia contra los desmovilizados parece fluctuar entre los homicidios selectivos e indiscriminados. Los principales picos de homicidios se registraron en noviembre de 2007 y enero de 2008, los momentos de mayor fricción entre las Águilas Negras de Don Mario y Los Paisas. Resulta útil analizar estas alzas a la luz del modelo de “espiral de conflicto”, propuesto por Pruitt, Rubin y Kim¹⁰⁸. Según los autores, el escalamiento del conflicto se genera a raíz de retaliaciones recíprocas contra las agresiones del oponente, creando una dinámica de violencia irreversible¹⁰⁹. A medida que aumenta la violencia, surgen distorsiones en las percepciones de ambos grupos, haciendo que cualquier tipo de comportamiento fuera de lo ordinario sea considerado como sospechoso y por ende como agresivo, generando nuevas retaliaciones.

Esto explicaría por qué, aunque existe la percepción predominante entre los grupos entrevistados de que los desmovilizados asesinados en el municipio habrían estado involucrados en actividades ilegales, es posible que en casos aislados, la dinámica de confrontación haya llevado a los grupos a sospechar y a ejecutar desmovilizados por negarse a retomar las armas¹¹⁰, o por tener vínculos con miembros del bando contrario.

El gran conocimiento, que a diferencia de otros grupos, poseen los participantes sobre las

bandas emergentes, también los ha convertido en objetivos militares. La mayoría de los participantes entrevistados dijo conocer la forma como operan, la identidad de algunos de sus miembros y quiénes son sus comandantes, por lo que no sorprende que sean blancos prioritarios para las bandas. En las luchas por el control territorial, las bandas emergentes han procurado neutralizar las posibles fuentes de información del enemigo.

Teniendo esto en cuenta, es posible también que las ofensivas de la fuerza pública hayan generado retaliaciones por parte de las bandas emergentes contra la población desmovilizada. A pesar de no ser una práctica generalizada, se han conocido casos en los que la fuerza pública ha utilizado a desmovilizados como fuentes de inteligencia para sus operativos. En octubre de 2008, la MAPP/OEA alertó sobre el desconocimiento de algunas unidades militares y policiales respecto a las directivas del Ministerio de Defensa que restringen la participación de los desmovilizados-cooperantes en operativos¹¹¹. Esto corrobora la información suministrada por uno de los desmovilizados reincidentes, quien afirmó haber sido perseguido por miembros de Los Traquetos que lo acusaban de ser informante del Ejército.

Finalmente, no se puede descartar que el proceso de articulación de las bandas emergentes haya generado una serie de purgas internas que hayan

contribuido al incremento en las muertes de los desmovilizados. De acuerdo con informes del Ejército y la Policía, tanto Los Paisas como las Águilas Negras han incorporado entre sus filas miembros de los Vencedores de San Jorge y de Los Traquetos¹¹². Es posible que, estos cambios en la composición interna de las bandas, puedan haber incrementado las sospechas de traición, resultando en retaliaciones y ajusticiamientos. Adicionalmente, según fuentes oficiales, la creciente efectividad de las operaciones de la fuerza pública habría obligado a los comandantes de las bandas a replegarse de las zonas de operaciones, dejando los territorios en manos de mandos menores¹¹³. Esta falta de supervisión podría estar favoreciendo la toma de decisiones arbitrarias, incluyendo represalias contra la población desmovilizada.

Respecto a la autoría de los asesinatos, la percepción mayoritaria es que éstos son cometidos por miembros de bandas emergentes. Sin embargo, aún no se conocen resultados de las investigaciones judiciales que permitan determinar con certeza si los autores materiales o intelectuales de los homicidios de desmovilizados serían otros desmovilizados. De los 269 desmovilizados capturados en el departamento, sólo un 25% estaría detenido por homicidio o vinculado a un proceso por homicidio¹¹⁴. Sólo en casos puntuales, se ha podido demostrar que algunos desmovilizados estarían involucrados en los crímenes. En marzo de 2008, por ejemplo, por haber asesinado a Alberto Pérez, habitante de Tierralta y desmovilizado del Bloque Central Bolívar; fueron capturados por la Policía Robert Muñoz, antiguo integrante del Bloque Heroes de Tolová, residente de Valencia, y Elkin Pérez del desmovilizado Bloque Córdoba residente de Tierralta; ambos presuntos miembros de las bandas emergentes¹¹⁵.

III. Desmovilizados frente a la inseguridad

A fin de explorar los diferentes mecanismos que utilizan los desmovilizados colectivos para hacer frente a una situación de inseguridad, se preguntó a los diferentes grupos focales: ¿Qué hacen los desmovilizados en Tierralta cuando reciben o perciben una amenaza a su integridad personal? Con base en las respuestas de los entrevistados, se exploró un grupo de contra-preguntas buscando clarificar la percepción de la magnitud del fenómeno, y sus posibles consecuencias respecto a: (1) la permanencia de los participantes en el programa, y (2) el potencial de convertirse en factores de violencia contra otros desmovilizados. Finalmente, se les pidió a los miembros de cada grupo ejemplificar sus respuestas.

Las respuestas de los entrevistados se pueden clasificar en cuatro categorías: (1) protección del Estado, (2) traslado, (3) regreso a la ilegalidad, y (4) aislamiento y compromiso con el proceso de reintegración. En cada sección se presentan las principales observaciones de las entrevistas con los diferentes grupos focales, así como una valoración de los resultados.

3.1. Protección del Estado

• Principales observaciones

Sólo una minoría de los amenazados acude al Estado.

De acuerdo con los entrevistados, sólo una mínima proporción de los desmovilizados amenazados acude a las instituciones para solicitar protección. Se conocen varios casos de participantes amenazados pero sólo una mínima parte habría autorizado a la ACR a realizarle un estudio de riesgo y a proporcionarle medidas de protección. Ninguno de los participantes ni de sus familiares dijo conocer casos de compañeros que hayan acudido a las instituciones en caso de amenazas.

Existen barreras que impiden que los participantes acudan a las instituciones. La principal de ellas es la desconfianza de los desmovilizados en la Policía. Esta noción es compartida en gran medida por sus familiares y miembros de la comunidad. La desconfianza ha llegado a tal punto que los participantes prefieren no firmar el acta de asistencia a las actividades del programa a las cuales asisten miembros de la Policía en cumplimiento de sus labores de acompañamiento. Muchos participantes también cambian de número telefónico con frecuencia para evitar ser monitoreados. Los desmovilizados reincidentes también declararon desconfiar de la fuerza pública; tres de ellos dijeron que la falta de presencia de las autoridades en sus zonas de residencia, no les dejó otra opción que retomar las armas.

La desconfianza de los participantes se debe en gran medida a lo que algunos consideran como malos tratos por parte de la Policía. Según ellos, la Policía los ha estigmatizado de ser criminales y miembros de bandas emergentes. Uno de los entrevistados dijo que la Policía lo habría acusado de ser sospechoso de un robo sólo por ser desmovilizado y lo habría requisado de manera violenta. Otros aseguraron que miembros de la Policía les habrían tomado fotos para luego identificarlos como criminales. Sin embargo, es probable que la desconfianza de los participantes en la fuerza pública también se haya visto influenciada por experiencias pasadas: tres de los cinco participantes entrevistados mencionaron haber tenido información

de colaboración entre miembros de la fuerza pública y los grupos de autodefensas durante su pertenencia a estos grupos.

Hay también la percepción entre los participantes de que existe una amplia red de corrupción entre la fuerza pública. A pesar de no conocer ningún caso específico de corrupción, varios desmovilizados afirmaron que miembros de la Policía estarían trabajando de la mano con las Águilas Negras y con Los Paisas. Esta noción es compartida en gran medida por sus familiares y miembros de la comunidad: uno de los familiares aseguró que la Policía ha sido negligente en la protección, de la población civil en su corregimiento, de los patrullajes en moto de las bandas, mientras uno de los miembros de la comunidad aseguró haber visto a personal de la Policía entregar listados de nombres a miembros de las Águilas Negras. Adicionalmente, dos de los desmovilizados entrevistados hicieron alusión a los casos de falsos positivos por los que ha sido acusada la Brigada XI del Ejército, con sede en Montería, como un factor más de desconfianza.

Finalmente existen barreras logísticas, que impiden que los desmovilizados acudan al Estado para su protección. El hecho de que la elaboración de los estudios de riesgo, necesarios para recibir medidas de protección, tome de dos a cuatro semanas en ser elaborados, se ha constituido en un obstáculo. Según ellos, los desmovilizados prefieren otros mecanismos de protección más expeditos.

Por otra parte, algunos miembros de las autoridades consultadas, afirmaron que los desmovilizados tendrían todas las garantías por parte de las instituciones para asegurar su protección. Un miembro de la fuerza pública afirmó que, aún cuando la mayoría de los estudios de riesgo realizados arrojan como resultado la inexistencia de una amenaza extraordinaria, las autoridades han hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de los desmovilizados. Otro miembro de la fuerza pública aseguró que reciben poca colaboración de la población desmovilizada en general.

Los desmovilizados confían en la ACR. De acuerdo con un grupo mayoritario de los desmovilizados entrevistados, existe confianza entre los participantes y el personal de la ACR. Esta percepción fue confirmada por otros entrevistados, quienes a pesar de no indagar sobre temas de seguridad a fin de no ponerse en riesgo, afirmaron que algunos funcionarios de la ACR han recibido en confidencia información sobre amenazas a participantes. No obstante, existe un sentimiento de impotencia entre algunos

miembros del personal de la ACR, pues dicen no poder incidir en los desmovilizados para que hagan denuncias formales frente a las autoridades.

• Valoración de los resultados

En el marco de sus obligaciones, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los desmovilizados de riesgos extraordinarios. En su sentencia T-719 de 2003, la Corte Constitucional dejó claro que ningún ciudadano tiene el deber de soportar niveles de riesgo extraordinarios, y estableció estándares, tales como la inminencia, la seriedad, la claridad y discernir la amenaza, a fin de determinar su gravedad¹¹⁶. En cumplimiento de esta normativa, las instituciones estatales, particularmente la ACR y la Policía Nacional, han puesto en marcha medidas para facilitar la atención a desmovilizados que se encuentren en situación de riesgo extraordinario.

Como consecuencia del deterioro en los índices de seguridad en varias regiones, la ACR se ha visto obligada a incrementar las medidas de prevención a atención a desmovilizados en situación de riesgo. Durante el 2008, la ACR reportó haber reubicado a más de 100 participantes del programa al haberse encontrado que padecían niveles de riesgo extraordinarios¹¹⁷. Sin embargo, por su naturaleza individual, estas medidas se utilizan de manera excepcional, lo cual explica por qué sólo cubren al 0.3% de la población desmovilizada. El departamento de Córdoba ha requerido una especial intervención en este sentido: durante el 2008, la ACR recibió 59 solicitudes de protección, 16 de las cuales fueron aprobadas al ser calificadas de riesgo extraordinario¹¹⁸.

No obstante la importancia de las medidas de protección proporcionadas por las instituciones, el comportamiento de las cifras de solicitudes en el 2008 en Córdoba sugiere una tendencia contraintuitiva: el mayor número de solicitudes se llevaron a cabo durante el período del año que concentró menos casos de violencia contra la población desmovilizada. Aunque durante el primer semestre de 2008 se registraron casi el 85% de las muertes de desmovilizados en el departamento, sólo se recibieron el 35% de las solicitudes de protección¹¹⁹. Varios factores explican esta tendencia: Por un lado la ACR mejoró la difusión del programa de protección y su capacidad de reacción durante el 2008, mientras que no se descarta que una posible ola de amenazas como retaliación a la ofensiva de la fuerza pública durante el segundo semestre del año. Sin embargo, esta tendencia también da cuenta de que, en situaciones de alto riesgo, los desmovilizados estarían buscando medidas de protección más expeditas.

Tabla 4. Número de muertes de desmovilizados vs. número de solicitudes de protección en Córdoba

	2008			
	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre
Solicitudes estudios de riesgo	6	15	15	23
Muertes desmovilizados	46	20	11	3

Cifras: Alta Consejería para la Reintegración
Procesadas: CITpax

Además de requerir medidas más rápidas, es probable que el alto nivel de desconfianza que existe frente a las autoridades impida que los programas de protección del Estado cumplan plenamente su función. Como lo describe Barbara Walter, en diferentes conflictos armados a nivel mundial, la falta de confianza entre las partes, en especial relacionada a las garantías de seguridad y protección, se ha convertido en una de las principales causas de que los grupos armados vuelvan a las armas luego de un proceso de pacificación¹²⁰. Esto ocurre igualmente a nivel individual: si los desmovilizados no confían en que su contraparte - en este caso el Estado - está dispuesto o tenga la capacidad para garantizar su seguridad, es probable que busquen sus propias medidas de protección.

En el caso de Tierralta la desconfianza en las autoridades se ha visto magnificada como resultado de casos de corrupción en entidades de la fuerza pública. En abril de 2008, fue capturado el Mayor Julio Cesar Parga, comandante del Gaula del Ejército en Córdoba, y el Coronel Alvaro Zambrano, entonces comandante del Batallón Junín, por vínculos con la estructura de Los Paisas¹²¹. Igualmente, en noviembre de 2008, el Ministerio de Defensa anunció que abriría una investigación por posible negligencia de la Policía durante una masacre cometida en San José de Uré por sicarios de la estructura de Don Mario contra miembros de Los Paisas¹²². Así mismo, el testimonio de uno de los desmovilizados reincidentes sobre la compra de información de inteligencia por parte de comandantes de las bandas emergentes a miembros de la fuerza pública, se habría confirmado con la reciente acusación de la Fiscalía a un teniente de la Policía de Carabineros en Córdoba por supuesta colaboración con la banda de Los Paisas en el municipio de Tierralta¹²³.

Adicionalmente, las medidas de creación de confianza entre la fuerza pública y los desmovilizados parecen haber tenido efectos contraproducentes. Un claro ejemplo de esto se vivió cuando el Programa

de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior, encargado del proceso de reintegración antes de la ACR, intentó incluir excombatientes en tareas de auxiliares cívicos llevadas a cabo por la Policía. En el caso específico de Tierralta, la Policía entrenó a 117 auxiliares cívicos y 17 auxiliares de tránsito y transporte entre el año 2005 y el 2007. A pesar de haber proporcionado una fuente importante de empleo para algunos desmovilizados, la falta de continuidad del programa generó resentimientos entre las partes: de un lado los desmovilizados argumentan que la Policía no hizo un esfuerzo por mantener el programa, mientras las autoridades alegan que los desmovilizados no mostraron compromiso hacia sus labores como auxiliares.

Esta percepción se ha visto agravada por la desconfianza que a su vez, tienden a tener las autoridades, de los desmovilizados. Las capturas de un número minoritario pero significativo de desmovilizados por reincidir en delitos, y su constante reticencia a colaborar con la fuerza pública, los ha convertido regularmente en sospechosos de cometer crímenes. Esta situación de desconfianza mutua - la cual se asemeja sobremanera al dilema del prisionero - ha impedido que se establezca un vínculo de colaboración entre los desmovilizados y las autoridades.

En este escenario, la ACR se ha posicionado como un actor imparcial y confiable para los desmovilizados en Tierralta. En el 2008, el Centro de Servicio recibió 7 solicitudes de estudio de riesgo, de las cuales 4 recibieron calificación de riesgo extraordinario. Aunque esta cifra es significativa, el personal de la ACR cree que esto sólo representa una mínima parte de los desmovilizados que tienen niveles de riesgo elevados.

3.2. Traslado

• Principales observaciones

El traslado es usual, pero responde en su mayoría a dificultades económicas y no de seguridad: Todos los grupos focales entrevistados coincidieron en señalar que el traslado es un fenómeno minoritario pero común entre los desmovilizados. No obstante, la mayoría coincidió en decir que, sólo en casos puntuales, responde a razones de seguridad. Sólo uno de los desmovilizados reincidentes admitió haber dejado temporalmente su casa en Tierralta por amenazas de la banda de Los Traquetos durante el segundo semestre de 2007, antes de regresar a la ilegalidad.

La mayoría de los participantes del programa de reintegración y de los reincidentes relacionaron los traslados con la falta de empleo en el municipio; cuatro de ellos reconocieron haberse trasladado a otras regiones en busca de mejores oportunidades laborales.

Según dos de los grupos entrevistados, el traslado por razones de seguridad responde solamente a amenazas directas y no a una situación de inseguridad generalizada. Según los desmovilizados, la mayoría de los asesinatos son cometidos contra quienes estaban participando en actividades ilegales, por lo que varios dicen sentirse seguros, al no tener vínculos con la ilegalidad. La mayoría de los desmovilizados y de sus familiares dijo haber considerado salir de la zona durante los momentos más álgidos de la confrontación entre las bandas emergentes - segundo semestre de 2007 y el primero de 2008 - pero prefirieron quedarse pese a la situación. Esta opinión contrasta con la de los miembros de la comunidad, quienes sostienen que un número minoritario pero significativo de participantes se habrían alejado del municipio durante este período, a causa de la situación de inseguridad generalizada.

Traslados a zonas cercanas: un grupo mayoritario de los entrevistados señaló que la mayor parte de traslados se hacen a regiones aledañas al municipio. Tres de los desmovilizados entrevistados dijeron haberse trasladado a otros municipios del departamento, incluyendo Montería y Cereté entre 2007 y 2008. Por otro lado, tres de los reincidentes dijeron haberse desplazado a Montelíbano, El Bagre en Antioquia y Arboletes, buscando mejor suerte en el aspecto laboral, antes de regresar a las actividades ilegales. Estos traslados se efectuaron entre el segundo semestre de 2006 y el primero de 2007 a raíz de los problemas con los proyectos productivos en Tierralta que, por diferentes factores, no fueron sostenibles.

En los pocos casos de traslados por seguridad, los desmovilizados prefieren emigrar fuera de la zona a ciudades como Medellín y Bogotá, donde puedan adoptar un perfil más bajo y a su vez encontrar opciones de empleo. Uno de los desmovilizados reincidentes corroboró esta afirmación al reconocer que se había trasladado para Barranquilla a finales del 2007 al haber recibido amenazas contra su vida.

Se trasladan y siguen participando: Según los entrevistados, en la mayoría de los casos, las personas que se trasladan, se reportan al Centro de Servicios en su lugar de destino. En los pocos casos de traslados por seguridad, sólo una minoría se reporta.

Existen barreras que impiden que un desmovilizado se traslade: La mayoría de los desmovilizados y de sus familiares aseguraron preferir quedarse en Tierralta. Según los participantes, ya se han acostumbrado a la situación de inseguridad generalizada. Los familiares de los desmovilizados hicieron énfasis en las dificultades que implica un traslado para la familia: una de las esposas dijo temerle más a Bogotá que a Tierralta. Además, la falta de la cercanía de la familia, en especial de sus padres quienes muchas veces les ayudan a sostenerse económicamente, les impide pensar en el traslado. Adicionalmente, existe la percepción, entre los desmovilizados y sus familiares, de que el traslado podría dificultar el pago de la ayuda humanitaria que les brinda la ACR, por lo que prefieren no emigrar.

• Valoración de los resultados

El traslado no parecería ser el mecanismo más utilizado para hacer frente a la inseguridad. Según cifras de la ACR, menos del 1% de los traslados que se realizan mensualmente a nivel nacional corresponden a motivos de inseguridad¹²⁴. Sin embargo, la falta de información, hace casi imposible verificar esta afirmación. Según el personal de la ACR, no existen cifras confiables de traslados antes de junio de 2008, que permitan analizar su comportamiento durante los períodos de más altos índices de inseguridad en el municipio de Tierralta. Adicionalmente, está adscrita al municipio una población de 140 desmovilizados - entre postulados de la Ley de Justicia y Paz, potenciales miembros de bandas emergentes, y desmovilizados que dejaron el programa - con los cuales la ACR no ha tenido contacto desde junio de 2008 y por lo tanto es difícil saber si se han desplazado a otras zonas por razones de seguridad¹²⁵.

Teniendo estas limitaciones presentes, un cotejo de las cifras de los participantes vinculados al proceso de reintegración en Tierralta¹²⁶, a partir de junio del 2008, muestra que alrededor de 70 participantes se habrían desplazado a otras regiones, y se habrían reportado a los Centros de Servicios más cercanos a su lugar de destino. Esta cifra representa casi un 12% de la población de participantes, vinculados al programa en el municipio.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la ACR, los principales destinos de traslado son zonas aledañas, donde la situación de seguridad es en ocasiones igual o peor que en el municipio de salida. De los 70 desmovilizados que decidieron trasladarse de Tierralta, un 37% se reportó en el Centro de Servicios de Montería y un 10% en el de Apartadó (Antioquia) - zonas de alta afectación para la población desmovilizada - seguido por ciudades más apartadas

como Cartagena (7%), Medellín (7%), Bogotá (6%) y Valledupar (6%), entre otras. Esto parece confirmar las afirmaciones de los desmovilizados y familiares respecto a que la principal motivación para trasladarse es la búsqueda de oportunidades laborales y no la seguridad personal.

Tabla 5. Principales zonas de traslado de los desmovilizados en Tierralta

Municipio de origen	Nº de desmovilizados	% del total de traslados
Montería	25	36%
Cúcuta	1	1%
Cartagena	5	7%
ACR móvil	3	4%
Apartadó	10	14%
Bucaramanga	1	1%
Medellín	5	7%
Barranquilla	1	1%
Bogotá	4	6%
Pereira	4	6%
S. Pedro de Urabá	2	3%
Valledupar	4	6%
Villavicencio	1	1%
Sincedejo	2	3%
Santa Marta	1	1%
TOTAL	69	100%

Cifras: Alta Consejería para la Reintegración
Procesadas: CITpax

Adicionalmente existen atenuantes que reducen la probabilidad de que los desmovilizados se trasladen para hacer frente a las amenazas de seguridad. Según Stathis Kalyvas, el desplazamiento masivo tiende a ser asociado a la violencia indiscriminada generada por luchas de territorio entre actores armados¹²⁷. En el caso de Tierralta, la percepción predominante es que la mayoría de las amenazas y de los homicidios serían selectivos, lo cual explicaría por qué no ha habido migraciones masivas de desmovilizados hacia otras regiones. Esto corrobora la percepción de la mayoría de los desmovilizados entrevistados, quienes afirman que aquellos que se mantengan al margen de las actividades ilícitas, no tienen razón para temer.

El traslado también genera altos niveles de incertidumbre, por lo que se puede suponer que sólo se convertiría en un mecanismo viable para casos de riesgo extremo. De acuerdo con los relatos de los desmovilizados y de sus familiares, es claro que éstos tienen una alta tolerancia a las situaciones de inseguridad con la cual han convivido durante años.

En cambio, ambos grupos manifestaron un especial temor a tener que enfrenar la incertidumbre en otras zonas, pues en Tierralta cuentan con el apoyo de sus padres y de otros familiares que les proveen apoyo económico y social. Siguiendo esta racionalidad, los desmovilizados prefieren, de manera general, quedarse y hacer frente a la inseguridad, antes de irse y tener que enfrentar la incertidumbre de vivir en otra parte.

3.3. Regreso a la ilegalidad

• Principales observaciones

La vinculación a las bandas emergentes es usual, pero responde, en su mayoría, a factores económicos y no de seguridad: Todos los grupos entrevistados, incluyendo las autoridades, coincidieron en que un grupo minoritario pero significativo de desmovilizados se habría vinculado, de una manera u otra, a las bandas emergentes en el municipio. Así mismo, señalaron que la mayoría se vincula por motivos económicos, y que sólo unos pocos, regresan a la ilegalidad como resultado de una amenaza directa. De los cinco desmovilizados reincidentes entrevistados, cuatro hicieron referencia a la precaria situación económica que vivieron luego del fracaso de los proyectos productivos de caucho y cacao en el municipio, entre 2006 y 2007, como la principal razón para vincularse nuevamente a actividades ilegales.

Aunque los observadores y las autoridades aseguran que existe sólo un grupo pequeño de desmovilizados que se estaría incorporando a las bandas – al igual que a nivel nacional – la mayoría de los participantes y de los desmovilizados reincidentes aseguró que las bandas en el municipio estarían conformadas en su mayoría por desmovilizados y miembros de las autodefensas que no se desmovilizaron. Cuatro de los cinco participantes del programa entrevistados, dijeron conocer entre 5 y 10 desmovilizados que habrían regresado a la ilegalidad; uno de los familiares dijo saber, personalmente, de por lo menos 3 que se habrían vinculado entre 2008 y 2009.

La incorporación de desmovilizados a las bandas se debe, según lo manifestado por los grupos, a una demanda de mano de obra para actividades ilegales. Según todos los grupos entrevistados, las bandas atraen a los desmovilizados a través de ofrecimientos de dinero. Observadores, miembros de la comunidad y las autoridades coinciden en que los sueldos varían entre 400.000 y 2 millones de pesos, dependiendo de la necesidad de los grupos, y del rango de los reclutados: pagan menos a los jóvenes sin experiencia que a los desmovilizados y los ex-soldados del Ejército.

La vinculación es en su mayoría voluntaria, y únicamente en circunstancias de enfrentamiento entre bandas, se ha hecho de manera forzada: Cuatro de los cinco participantes del programa reconocieron haber recibido propuestas para afiliarse a las nuevas estructuras armadas; dos de ellos en dos o más ocasiones durante el último año. Sin embargo, ninguno sufrió amenazas al haberse negado a aceptarlas. Igualmente, la mayoría de los desmovilizados reincidentes dijo haber regresado a la ilegalidad por voluntad propia.

No obstante, el enfrentamiento entre bandas emergentes incrementó el reclutamiento, y resultó en algunos casos de reclutamiento forzado. Durante la lucha por territorio entre bandas emergentes, se evidenció una disminución en el número de participantes vinculados al programa ya que algunos fueron reclutados. Así mismo, se conocieron casos de desmovilizados que fueron amenazados para unirse a las bandas, por sospechas de pertenecer al bando contrario, como relató un observador, o por conocer sus antecedentes como buen combatiente.

En el marco de la confrontación, los desmovilizados reconocieron que además del factor económico, existe una motivación secundaria para estar en las bandas: es mejor protección estar que no estar con ellas. Según tres de los desmovilizados y uno de los desmovilizados reincidentes, “es preferible morir armado y luchando que esperar a la muerte pasivamente”¹²⁸.

Algunos desmovilizados reclutados se ausentan del programa, mientras otros siguen participando esporádicamente en las actividades de la ACR: De acuerdo con todos los entrevistados, además del grupo minoritario de desmovilizados que habría dejado el programa para unirse a las bandas emergentes, existe un número indeterminado de participantes ligados a estos grupos que siguen participando en las actividades del programa de reintegración. Dos miembros de la comunidad dijeron que, entre 5 y 10 de los desmovilizados en sus veredas estarían de alguna forma colaborando con las bandas sin ausentarse del programa; uno de los participantes del proceso dijo sospechar de más de 15 de sus compañeros.

Varios entrevistados manifestaron su preocupación respecto a que algunos miembros de las bandas estén instrumentalizando el programa para evitar ser detectados por la fuerza pública. Según algunos tutores de la ACR, esto también les permite enterarse de lo que sucede con la población desmovilizada y reclutar nuevos miembros además de seguir teniendo acceso

a los beneficios económicos que ofrece el programa.

Las dificultades económicas han forzado a muchos desmovilizados a vincularse con la economía informal del municipio, trabajando como moto-taxistas o “jornaleros” en fincas en las zonas rurales. El moto-taxismo les permite servir como informantes, patrulleros y fuentes de provisiones para las bandas, mientras siguen participando en las actividades de la ACR. Según miembros de la comunidad, algunos de éstos se ausentan durante unas semanas del programa y regresan antes de final de mes para cobrar su ayuda humanitaria.

Estos desmovilizados se vinculan gradualmente a las bandas para luego ser reclutados como combatientes. Según un observador, a medida que los desmovilizados cumplen labores logísticas para las bandas emergentes, éstos van poco a poco alejándose de las actividades de la ACR. A medida que se intensifican las disputas por territorio entre bandas, estos desmovilizados tienden a ausentarse permanentemente del programa para combatir con las bandas.

Una vez reclutados, la mayoría de los desmovilizados emigra a otras regiones, pero regresan a reclutar en el municipio: Los desmovilizados reclutados por las bandas en Tierralta, tienden a operar en otras regiones. De los cinco desmovilizados reincidentes entrevistados, cuatro fueron capturados en otras regiones: dos en Montería, uno en Montelíbano y uno en Arboletes (Antioquia). Según dos de los participantes del programa, esto responde al riesgo de ser reconocidos en el municipio donde residen. Esto coincide con la percepción de los miembros de la comunidad y de los propios participantes sobre la composición de las bandas emergentes en el municipio. Según ellos, un número significativo de los combatientes vendría del Urabá y Bajo Cauca antioqueños.

A pesar de operar en otras regiones, los desmovilizados que se han unido a las bandas regresan al municipio e intentan reclutar a otros participantes del programa. De los cuatro participantes entrevistados que recibieron ofertas, todos manifestaron que éstas provinieron de viejos compañeros del mismo bloque o de otros compañeros desmovilizados. Especial preocupación manifestaron los participantes del proceso de que las bandas recluten a antiguos mandos medios, pues éstos luego tienden a llevarse a sus antiguos subalternos. Según lo relatado por dos desmovilizados, uno de sus antiguos comandantes los habría “mandado llamar”. Así mismo, tres de los cinco desmovilizados reincidentes, dijeron haber sido

reclutados por otros desmovilizados.

• Valoración de los resultados

El accionar de las bandas emergentes en el municipio de Tierralta ha llevado a que un grupo minoritario pero significativo de desmovilizados se vea forzado a regresar a la ilegalidad. Aunque, según lo manifiestan las fuentes consultadas, la incorporación es voluntaria y por razones económicas, es de especial preocupación por los efectos negativos que puede tener sobre la población desmovilizada en general.

Entre 2005 y 2008, fueron capturados 269 desmovilizados colectivos en el departamento. Es decir, 7 de cada 100 desmovilizados habría sido capturado en Córdoba, cifra que estaría muy por debajo del promedio nacional de 12 capturas por cada 100 desmovilizados. De los desmovilizados capturados un poco más del 25% habría sido detenido por relación a casos de homicidio, y un 75% por otros delitos; en abril 2008, la ACR reportó que los delitos más comunes, además del homicidio, serían el concierto para delinquir, el hurto y el porte ilegal de armas, entre otros, los cuales estarían en su mayoría asociados al accionar de las bandas emergentes¹²⁹. Sin embargo, el incremento en el último año en cuanto al número de capturas, ha causado preocupación. Entre 2007 y 2008, el número de capturas de desmovilizados pasó de 61 a 128. Este período coincidió con la disputa por territorio entre bandas emergentes y un incremento en las cifras de afectación a la población desmovilizada¹³⁰.

Tabla 6. Numero de capturas de desmovilizados vs. población asignada en Córdoba

	2005	2006	2007	2008
Población asignada	2290	3660	3730	3783
Capturas desmovilizados por homicidio	2	8	7	21
Capturas desmovilizados por vínculos a procesos de homicidio	5	11	12	6
Capturados por otros delitos	11	42	43	101

Cifras: Centro de Servicio de Montería, citado en Víctor Negrete, "La Desmovilización", *Op. Cit.*

Las dinámicas de inseguridad también han generado sospecha, por parte de los diferentes grupos entrevistados, de que los desmovilizados

que se ausentan del programa, podrían estar cometiendo crímenes durante estos períodos. Sin embargo las cifras desde julio de 2008, revelan que, en promedio, 88% de los desmovilizados "vinculados" al proceso asisten mensualmente a las actividades de la ACR, y sólo 89 de ellos se habrían ausentado durante períodos de más de tres meses durante el ciclo mencionado¹³¹. Desafortunadamente, no existe información que permita analizar las cifras de asistencia de los desmovilizados a las actividades del proceso de reintegración en los momentos de mayor intensidad de enfrentamiento entre las bandas emergentes en el municipio, por lo que la percepción de los entrevistados es difícil de contrastar.

Más preocupante es la existencia de una población de desmovilizados que no han tenido contacto regular con la ACR que podría estar en riesgo de ser reclutada por las bandas. Según cálculos de la Policía, esta población "flotante" sería de aproximadamente 1.000 desmovilizados en el departamento¹³². En el municipio de Tierralta, la ACR reportó no tener contacto con 140 desmovilizados registrados en el municipio, entre los cuales se encuentran algunos postulados de la Ley de Justicia y Paz recluidos en la penitenciaría de Urrá, así como un número indeterminado que habrían decidido dejar el programa de reintegración en la etapa de transición entre el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio (PRVC) del Interior y la ACR entre 2006 y 2007 al haberse cumplido el período de 18 meses que inicialmente constituyó el proceso de reintegración. De los 5 desmovilizados reincidentes entrevistados, cuatro dijeron haber dejado el programa en esta época, y señalaron que algunos de sus compañeros habrían hecho lo mismo¹³³.

La posibilidad de que los flujos migratorios estén relacionados con el reclutamiento de desmovilizados de otras zonas para delinquir en el municipio, también ha causado cierto nerviosismo entre los diferentes grupos entrevistados. Los informes de la MAPP/OEA, registraron flujos migratorios del Bajo Cauca hacia el sur de Córdoba relacionados con el reclutamiento de desmovilizados en el 2007¹³⁴. Según la información proporcionada por la ACR, se estima que entre junio de 2008 y abril de 2009, 33 participantes se han trasladado de otras regiones al Centro de Servicio de Tierralta, que da cobertura a los municipios de Valencia y Tierralta. De éstos, un 37% habrían estado anteriormente inscritos en los Centros de Servicios de San Pedro de Urabá, Apartadó, Cauca y Tarazá, un 21% en el de Montería, así como un 7% en el de Pereira y un 7% en el de Medellín¹³⁵.

Tabla 7. Principales zonas de proveniencia hacia el Centro de Servicio de Tierralta

	N° de desmovilizados	% del total
CS Montería	11	22%
ACR Pereira	4	8%
CS Caucasia	9	18%
CS Sincelejo	3	6%
CS Apartadó	4	8%
CS Aguachica	1	2%
CS S. Pedro de Urabá	5	10%
CS Tarazá	1	2%
CS Santa Marta	1	2%
CS Quibdó	1	4%
CS Bogotá	3	6%
CS Medellín (Paz y Reconciliación)	4	8%
CS Barranquilla	1	2%
CS Villavicencio	1	2%
CS Cartagena	1	2%
TOTAL	51	100%

Cifras: Alta Consejería para la Reintegración
Procesadas: CITPax

Según informes de la ACR, la mayoría de los desmovilizados asesinados habrían estado vinculados a las actividades del proceso de reintegración el mes anterior a sus muertes. De los desmovilizados muertos en Córdoba entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 – momento de mayor intensidad de los enfrentamientos entre bandas – un 68.8% había participado en alguna actividad de formación ofertada por la ACR. Adicionalmente, de los 257 desmovilizados capturados durante el 2008, 183 habrían tenido algún tipo de contacto con la ACR el mes anterior a su aprehensión¹³⁶. Esto confirmaría la percepción de varios de los grupos de entrevistados sobre la posible vinculación de desmovilizados en actividades ilegales mientras asisten a las actividades del programa de reintegración de la ACR.

Es claro pues, que frente a la situación de inseguridad generada por las bandas emergentes, algunos desmovilizados decidan incorporarse a las bandas emergentes por razones económicas y no necesariamente para evitar amenazas¹³⁷. La presencia de las bandas emergentes ha impuesto las economías ilegales e informales en el municipio. Como lo explica Duncan, la presencia de grupos violentos ligados a negocios ilegales tiende a desplazar a las economías lícitas primarias y a la incipiente industria, haciendo de las armas y la ilegalidad la principal fuente de

trabajo¹³⁸. Frente a esta situación, los desmovilizados tienden a sucumbir frente a las ofertas económicas de las bandas¹³⁹.

Es probable también, que el incremento en el número de capturas, en especial de mandos medios de las bandas emergentes, genere un proceso de reconfiguración de las estructuras que impulse nuevas olas de reclutamiento. Los operativos de la fuerza pública han logrado la captura de importantes cabecillas de las bandas en el departamento, por lo que se ha registrado un cambio en la cúpula de estas organizaciones. Según informes policiales, los dos nuevos cabecillas de Los Paisas y de las Águilas Negras en Córdoba serían antiguos mandos medios de las autodefensas que habrían participado en las actividades de la ACR hasta septiembre y diciembre de 2008 respectivamente. Como relatan los entrevistados, estos cambios de liderazgos pueden suscitar nuevos procesos de reclutamiento, en especial de sus antiguos subalternos¹⁴⁰.

3.4. Aislamiento y compromiso con el proceso de reintegración

• Principales observaciones

La mayoría de los desmovilizados no quiere regresar a la ilegalidad: Las entrevistas con los participantes del proceso revelaron, en todos los casos, un especial compromiso con el programa de reintegración de la ACR frente a la situación de inseguridad que vive el municipio. A pesar de haber considerado las ofertas de las bandas emergentes por razones económicas, cuatro de los participantes entrevistados dijeron no querer regresar a las armas por los peligros que este tipo de vida implica para ellos y sus familias.

La mayoría de los participantes entrevistados dijo valorar más las oportunidades de formación profesional, psicosocial y académica que la ayuda económica que reciben. Todos son conscientes de que el estipendio económico no es suficiente para cubrir sus gastos, pero saben que el seguir la ruta de la reintegración les puede traer otros beneficios para su vida profesional y personal.

Quedarse y aislarse es la mejor defensa: A fin de minimizar el riesgo en los momentos de alta afectación, los participantes del programa dijeron optar por aislarse y evitar el contacto con otros participantes. A pesar de que la mayoría aceptó tener un amplio número de amigos desmovilizados, la mayoría de los participantes dijo no asistir a eventos públicos con excombatientes a fin de evitar cualquier tipo de sospechas.

Si bien muchos buscan aislarse, los desmovilizados dijeron no sentir miedo de asistir a las actividades de la ACR. En ningún momento han pensado en ausentarse del programa como resultado de la situación de inseguridad. Según uno de ellos, el único sitio donde se atreve a hablar con otros desmovilizados es durante las actividades de la ACR. Esto coincide con la percepción de varios entrevistados, quienes dijeron no conocer de casos de desmovilizados que se aislen del programa, no regresen a la delincuencia, y se queden en el municipio.

Sin embargo, algunos de los participantes entrevistados manifestaron que el aislamiento tiende a incrementar la estigmatización de la comunidad hacia ellos. Uno de los entrevistados dijo que en el barrio donde vive la gente había empezado a sospechar de él, pues nunca lo veían en la calle. Otro desmovilizado dijo que al haberse negado a asistir a un evento público, algunos miembros de la comunidad se habrían quejado sobre su falta de colaboración para los eventos comunitarios.

• Valoración de los resultados

La mayoría de la población desmovilizada ha optado por mantenerse en el programa de reintegración de la ACR para hacer frente a la situación de inseguridad generalizada que vive el municipio. De una población total inscrita en el municipio de 834 desmovilizados, en diciembre de 2008, habían fallecido 34 y 79 habían sido detenidos¹⁴¹. Adicionalmente, 140 de ellos no se habrían puesto en contacto con la ACR desde julio de 2008, por lo que serían considerados inactivos¹⁴², y 89 se habría ausentado durante un período mayor a tres meses entre julio de 2008 y abril de 2009 para luego regresar al programa. Esto quiere decir que alrededor de 492 desmovilizados – casi un 60% de la población inscrita – ha participado de manera ininterrumpida en el programa.

Teniendo en cuenta que, en un número significativo de casos, los reclutadores de las bandas emergentes serían otros desmovilizados, la combinación de la asistencia a las actividades de la ACR y el aislamiento en su vida personal ha resultado una estrategia eficiente para hacer frente a posibles riesgos. No obstante, en una comunidad que percibe aún a los desmovilizados como potenciales delincuentes, estas medidas de ostracismo voluntario podrían incrementar los niveles de estigmatización que sufren los desmovilizados.

Esto se suma a la crítica situación que vive la Asociación de Proyectos Productivos para los Desmovilizados en el Alto Sinú (Asoataco) en el municipio. Además de las dificultades de continuidad

que han sufrido la mayoría de los proyectos productivos para los desmovilizados en el municipio, entre enero y junio de 2008 fueron asesinados dos de sus dirigentes en la cabecera municipal¹⁴³. Aunque aún se desconoce el motivo de los homicidios, estas acciones han minado aún más la posibilidad de establecer algún tipo de coordinación entre los desmovilizados fuera del programa de reintegración, favoreciendo aún más su aislamiento.

Los programas de la ACR se han convertido en una tabla de salvación para los desmovilizados frente a la violencia en el municipio, por lo que es probable que las bandas emergentes busquen deliberadamente debilitarlos. Como reportó la MAPP/OEA en febrero de 2009, algunos de los tutores del programa han sido intimidados o amenazados por las bandas¹⁴⁴. El cierre temporal del Centro de Servicios de Puerto Boyacá por investigaciones de la Policía involucrando al personal de la ACR¹⁴⁵, y la captura, el 1 de abril de 2009, de una tutora de la ACR en San Pedro de Urabá en el marco de un operativo contra la organización de Don Mario, han hecho sonar las alarmas frente a posibles intentos de las bandas emergentes por infiltrar y desestabilizar el programa¹⁴⁶.

Haberse convertido en el principal referente institucional para los desmovilizados da cuenta de los logros del proceso, pero también puede constituirse en un factor de vulnerabilidad. En el caso de Tierralta, una potencial fractura de la estructura institucional de la ACR tendría, muy seguramente, efectos negativos como el incremento en los casos de reclutamientos por parte de las bandas emergentes¹⁴⁷. La falta de otros referentes institucionales a nivel local y regional, incluyendo un acompañamiento efectivo y unas medidas de generación de confianza por parte de instituciones como la Alcaldía y las entidades de administración de justicia, han incrementado la dependencia de los desmovilizados en la ACR y puede incrementar los riesgos en caso de una desestabilización del programa como resultado de la situación de inseguridad.

IV. Conclusiones

El estudio de caso sobre la situación de inseguridad de los excombatientes en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba reveló dos tendencias generalizadas: por un lado, los desmovilizados se han convertido en víctimas de la violencia generada por las bandas emergentes, en especial en momentos de confrontación por control territorial o de cambio de liderazgos. A su vez, frente a este escenario de inseguridad, un número minoritario pero significativo de los desmovilizados se habría vinculado de una

manera u otra a estas bandas, convirtiéndose en un factor de riesgo de reclutamiento o de señalamiento para la población desmovilizada en general.

Es evidente que las bandas emergentes se han convertido en el principal factor de riesgo para los desmovilizados en Tierralta. La transformación de las bandas locales que surgieron luego de proceso de desmovilización, a poderosas organizaciones con injerencia regional, ha generado un entorno de enfrentamientos por control territorial y poblacional que han afectado sobremanera a la población desmovilizada. En los momentos de mayor fricción, la violencia contra los desmovilizados tiende a fluctuar entre la selectividad y la indiscriminación, resultando en el incremento de homicidios y de amenazas a los excombatientes. Aunque no ha sido posible determinar la autoría de los crímenes en la mayoría de los casos, existe la percepción de que la mayoría de los miembros de las bandas serían miembros de las AUC no desmovilizados y desmovilizados reincidentes. En cuanto a las víctimas, se cree que la mayoría habría estado involucrada en actividades ilegales, posiblemente ligadas a las actividades de las bandas emergentes.

Frente a este contexto de inseguridad, se encontró que la mayoría de los desmovilizados escoge una de dos opciones: la mayoría decide quedarse en el programa y aislarse de otros desmovilizados, mientras un número minoritario sucumbe ante las ofertas económicas de las bandas emergentes. Sólo en casos de inseguridad extrema, los desmovilizados deciden trasladarse a otras zonas y en muy pocas ocasiones deciden acudir a las autoridades para denunciar amenazas.

Los desmovilizados que deciden incorporarse a las bandas emergentes son, en algunos casos, rápidamente trasladados a operar a otras regiones, cortando toda relación con el programa de reintegración. Sin embargo, varios de ellos regresan esporádicamente a la región con el ánimo de reclutar a sus antiguos compañeros. Existe también la percepción compartida de que algunos desmovilizados con vínculos con las bandas emergentes, seguirían participando en las actividades de la ACR. Según se pudo establecer, éstos se ausentaron sólo de manera temporal, haciendo casi imposible su identificación por parte de la fuerza pública. Entre las tareas de estos desmovilizados reincidentes está la recolección de información de inteligencia y el apoyo logístico para las bandas. Así mismo, existen sospechas de que algunos desmovilizados activos se estarían trasladando desde otros centros de servicio.

Es importante aclarar que el informe no pretende hacer generalizaciones sobre el comportamiento de los desmovilizados a nivel nacional. Las tendencias descritas son específicas del municipio de Tierralta, y no deben extenderse a la situación de toda la población desmovilizada. Sin embargo, las conclusiones del informe plantean importantes interrogantes frente a los efectos negativos que está teniendo la inseguridad en el proceso de reintegración. Es necesario, pues, cuestionarse la viabilidad de implementar un programa de reintegración en escenarios de violencia latente contra los desmovilizados. Para esto debe complementarse con nuevos estudios sobre los efectos de la inseguridad en el proceso de reintegración nacionales diferentes municipios azotados por índices de inseguridad similares. Adicionalmente, sería necesario elaborar nuevos informes con metodologías cuantitativas que contrasten los hallazgos cualitativos del Observatorio.

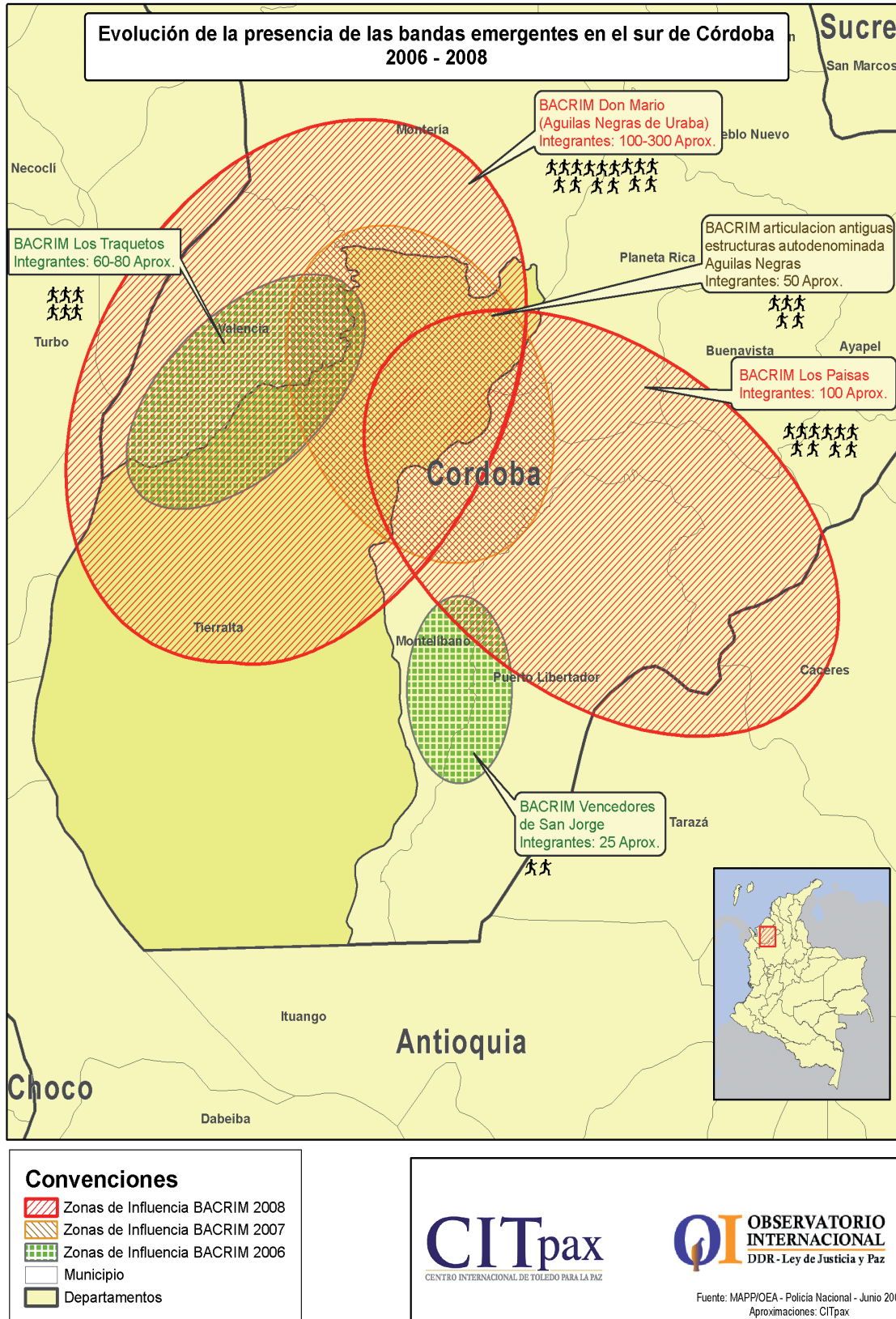
No obstante sus limitaciones, los hallazgos de este estudio pretenden servir como insumo para el mejoramiento de las condiciones de la población desmovilizada en proceso de reintegración. Es evidente que los esfuerzos de coordinación entre la ACR y la fuerza pública han mejorado la atención y prevención de riesgos de seguridad para los desmovilizados. Sin embargo, es esencial que se incremente la capacidad de las unidades dedicadas a estas tareas y se desarrollen nuevas herramientas para el monitoreo del comportamiento de los participantes del programa de reintegración en contextos de inseguridad. El seguimiento de los flujos migratorios y de los niveles de participación de desmovilizados en zonas de alta conflictividad podrían ayudar a impedir el reclutamiento de desmovilizados y la instrumentalización del proceso de reintegración, por parte de un número menor de desmovilizados, para cometer actividades ilegales. De la misma manera se debe coordinar con las instituciones judiciales con el propósito de esclarecer, en la medida de lo posible, los móviles y las autorías de los homicidios de los desmovilizados.

APÉNDICES

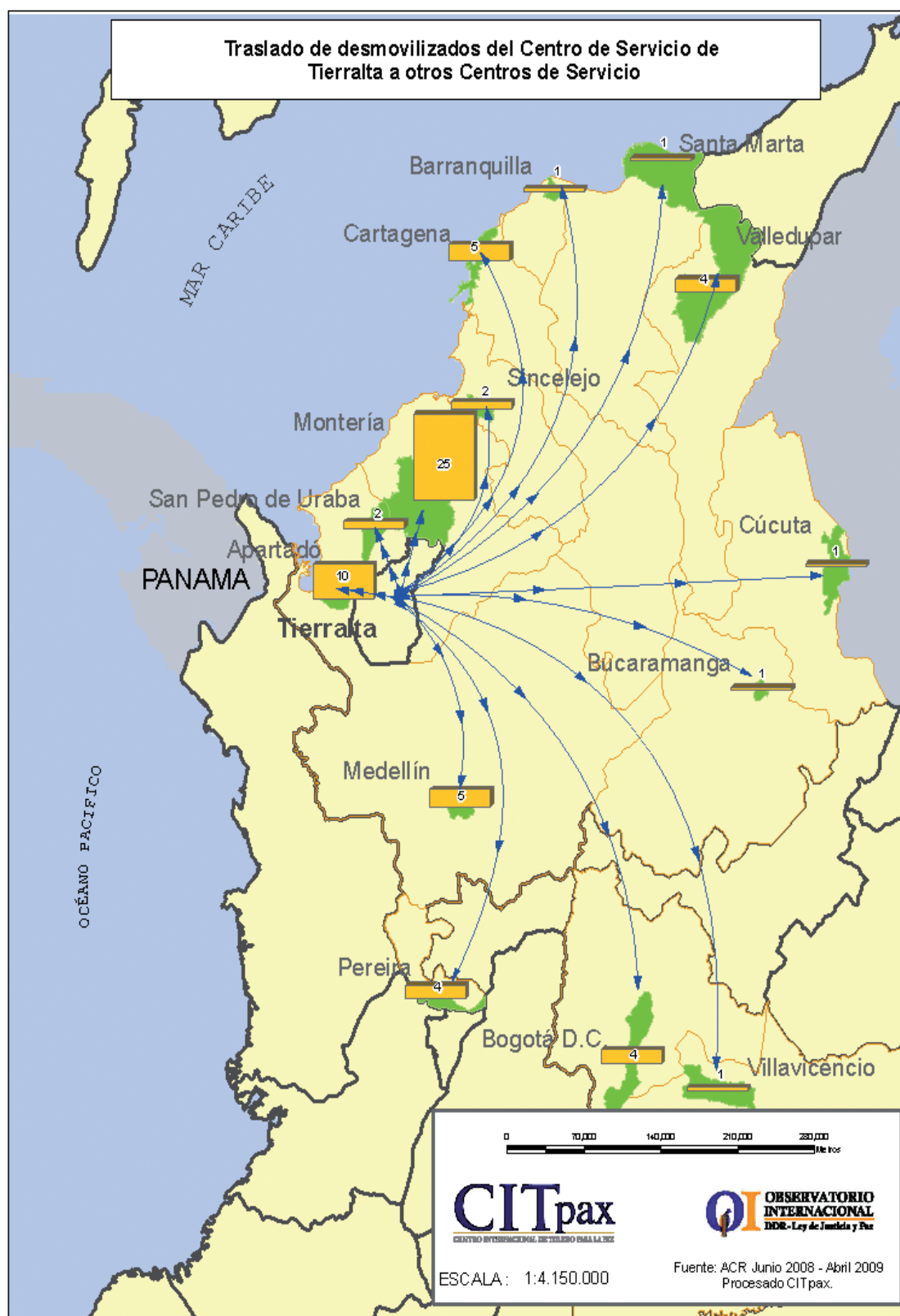
Mapa I



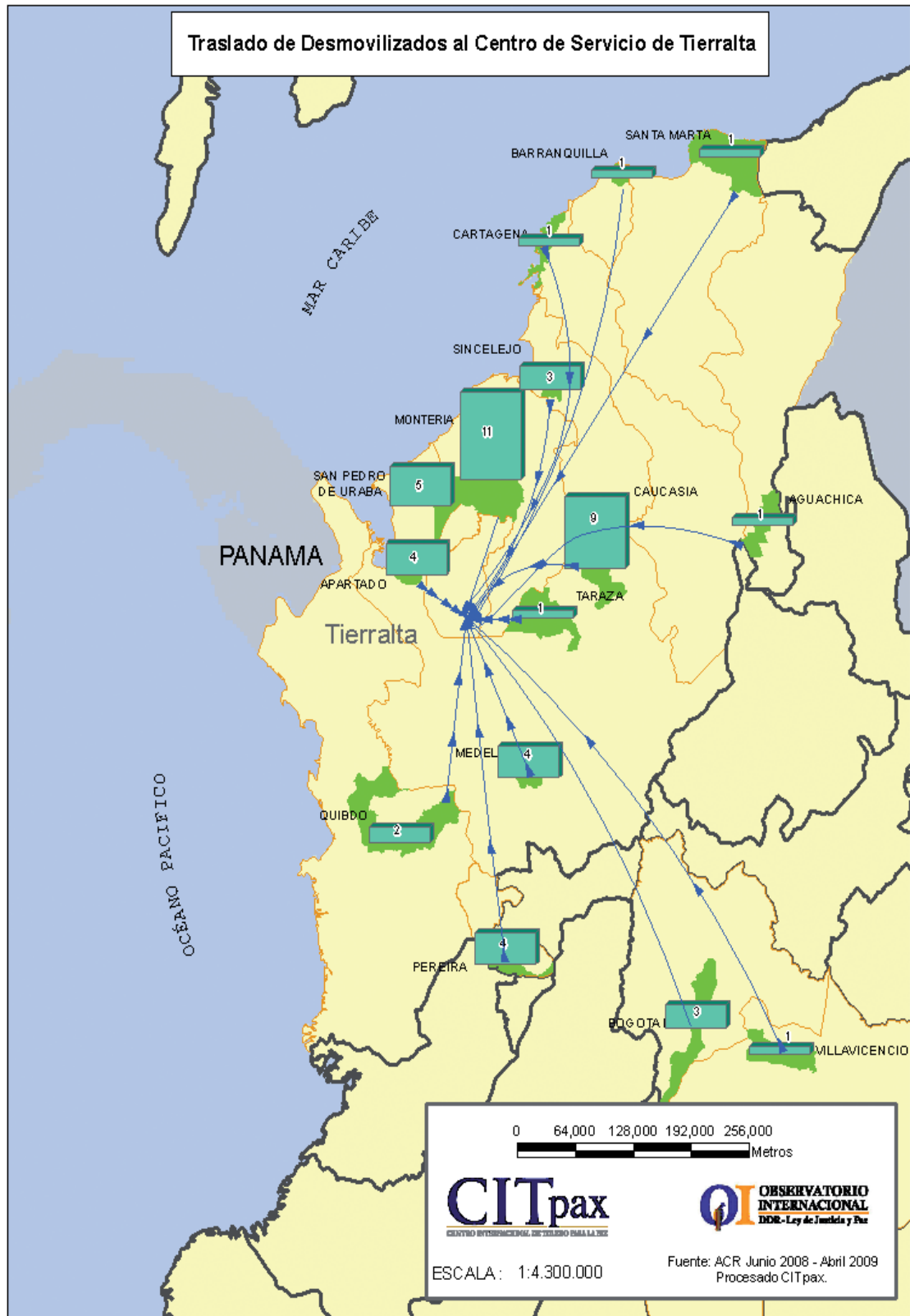
Mapa 2



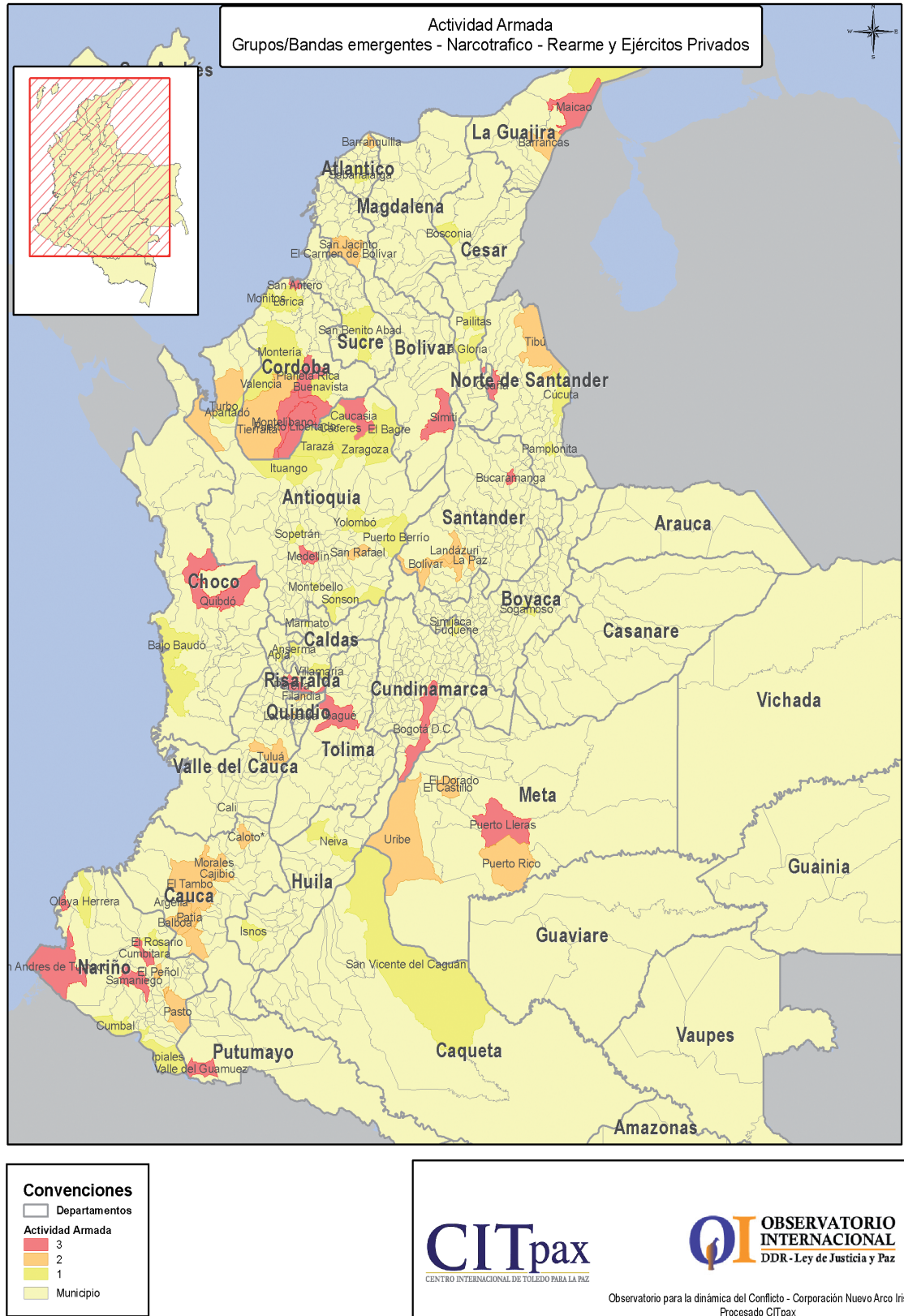
Mapa 3



Mapa 4



Mapa 5



Nota metodológica:

Para la elaboración del mapa, se ha considerado como actividad armada las acciones bélicas atribuibles a bandas emergentes, grupos de narcotráfico, ejércitos privados y otros grupos armados ilegales. Dentro del concepto de acciones bélicas se incluyen combates, emboscadas, ataques a bienes civiles, ataques a infraestructura militar y hostigamientos.

Los niveles de actividad armada se han calculado comparando el número de acciones a nivel municipal con la desviación estándar departamental y nacional. Los datos obtenidos corresponden al primer semestre de 2009. En el nivel 1 (amarillo) se encuentran los municipios que han superado la desviación estándar; en el nivel 2 (naranja) los municipios que superan dos veces la desviación estándar; y en el nivel 3 (rojo) los municipios que superan tres veces la desviación estándar.

Notas a pie de página

¹ Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), "Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales", 1 de diciembre de 2008.

² Según cifras de la ACR, la mayoría de éstas han sido muertes por homicidio, mientras que hay un porcentaje también alto del que no se tiene información.

³ La directiva n° 10 de 2007 de la Policía Nacional estableció una base para el control y monitoreo sistemático de la población desmovilizada, incluyendo la asistencia y apoyo a las actividades desarrolladas por la ACR. Con anterioridad la Policía había ya emitido instrucciones precisas a los Comandos Departamentales y Metropolitanos para hacer seguimiento y atender casos puntuales relacionados con la población desmovilizada. Instructivos n° 060 / DIROPOGESI, 20 de junio de 2006, Instructivo n° 011 / DIPON –DICAR, 23 de enero de 2007, La ACR también participa activamente en el Mecanismo de Verificación Conjunto contra Bandas Criminales (MEVEC) liderado por la Policía Nacional. Adicionalmente, en los lineamientos de la política de reintegración, se establecieron pautas para la prevención de riesgos de seguridad de los participantes incluyendo: (1) un sistema de información que permita la identificación temprana de situaciones de riesgo (2) el acompañamiento permanente a las actividades de la ACR por parte de Policía Comunitaria, y (3) la atención y orientación, por parte de los organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Pública en colaboración con la ACR, de los desmovilizados que manifiestan tener amenazas contra su vida e integridad física. Consejo Nacional de

Política Económica y Social, Op. Cit. El establecimiento de la Unidad de Prevención y Atención de Riesgos, cuyo objetivo es implementar medidas de protección para los desmovilizados con niveles de riesgo extraordinario y de monitorear la situación de seguridad de los participantes y de los funcionarios de los Centros de Servicio, ha incrementado sustancialmente la capacidad de la ACR para hacer frente a situaciones de inseguridad.

⁴ Elssy Bonilla, "La Metodología de la investigación: práctica social y científica", en Elssy Bonilla et al. (eds.): *La Investigación aproximaciones a la construcción del conocimiento científico*, Bogotá: Alfaomega, 2009, pp. 37-38.

⁵ Por cuestiones de seguridad, no se revelan las identidades de las personas entrevistadas. Los desmovilizados y sus familiares entrevistados son de diferentes regiones del municipio de Tierralta; los representantes de las autoridades pertenecen a instituciones de la rama ejecutiva, de la rama judicial y de la fuerza pública tanto a nivel nacional como departamental; el personal de la ACR incluyó diferentes contratistas del Centro de Servicio de Tierralta; los observadores del proceso incluyeron a miembros de organismos internacionales, de la academia y de la iglesia; y se escogieron líderes sociales de Tierralta y miembros de organizaciones de la sociedad civil como parte del grupo de miembros de la comunidad. En cuanto a los desmovilizados reincidentes, todos eran residentes del municipio de Tierralta.

⁶ Sue Arthur y James Nazroo: "Designing Fieldwork Strategies and Materials", en Jane Ritchie y Jane Lewis (eds.): *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers*, London: Sage Publications, 2006.

⁷ De acuerdo con la Corte Constitucional, un riesgo extraordinario existe cuando factores externos amenazan los derechos fundamentales del individuo. A fin de mitigar el riesgo las autoridades deben establecer su gravedad e intervenir de acuerdo a esta. Sin embargo, este riesgo se puede tornar "extremo" en la medida en que se logre establecer que este es específico e individualizable, concreto, actual, importante, serio, claro y discernible, excepcional, desproporcionado, grave e inminente. Corte Constitucional, Sentencia T-719 de 2003, pp. 64-65.

⁸ Véase Commission on Human Security: *Human Security Now*, New York: Commission on Human Security, 2003. <http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf> (05.6.09).

⁹ Según un análisis estadístico, durante los primeros dos años posteriores a la desmovilización, se registró una baja general del 13% en las tasas de homicidio en las zonas donde se desmovilizaron los grupos de autodefensa. Sin embargo, también se registraron variaciones significativas entre las diferentes regiones, registrándose incluso incrementos en las tasas de homicidios en algunas regiones. Jorge Restrepo y Robert Muggah: "Colombia's Quiet Demobilization: A Security Dividend", en Robert Muggah (ed.): *Security and Post-Conflict Reconstruction Dealing with Fighters in the Aftermath of War*, Londres: Routledge, 2009, pp. 30-46.

¹⁰ Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, 31 de diciembre de 2008.

¹¹ Ibidem.

¹² Estimativos de CITpax con base en datos de la MAPP/OEA, 26 de junio de 2009.

¹³ MAPP/OEA, "Decimosegundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 27 de febrero de 2009, p. 7.

¹⁴ Ibid., p. 8.

¹⁵ Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, "Diagnóstico Departamental Magdalena", 2007, pp. 4-5.

¹⁶ Estimativos de CITpax con base en datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

¹⁷ MAPP/OEA, "Decimosegundo Informe" Op., Cit., p. 6.

¹⁸ Estimativos de CITpax con base en datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ MAPP/OEA, "Decimoprimer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 25 de junio de 2008.

²¹ Ibidem.

²² Según el mapa de riesgo establecido en septiembre de 2008 por el sub-comité de Víctimas y Testigos del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, los municipios de riesgo extraordinario son Tierralta, Villavicencio, Valledupar, Santa Marta, y Cúcuta, y los de riesgo alto, Apartadó, Valencia y Barrancabermeja. Citado en Iniciativa de Mujeres por la Paz en Colombia, "Justicia y Seguridad para las Víctimas del Conflicto Armado", abril de 2009, pp. 72-73.

²³ Entre junio y diciembre de 2006, los informes de control y monitoreo de la población desmovilizada de la Policía Nacional identificaron el consumo de licor en establecimientos públicos, el tráfico de sustancias ilegales, los ajustes de cuentas, la manipulación de artefactos explosivos, y la participación en atracos, como algunas de las principales causas de muerte de los desmovilizados. Agencia Nacional de Noticias Policiales (ANNP), "Primer informe de control y monitoreo a los desmovilizados", 7 julio de 2006. ANNP, "Quinto informe sobre el control y monitoreo a los desmovilizados", 10 de noviembre de 2006. Estas tendencias se siguieron registrando durante el 2007, resultando en un número significativo de desmovilizados muertos y heridos. ANNP, "Decimosegundo Informe sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales", 6 de junio de 2007. Durante el primer semestre de 2007, la MAPP/OEA también reportó disputas entre desmovilizados en Sucre. MAPP/OEA, "Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 14 de febrero de 2007.

²⁴ Cifras incluyen desmovilizados individuales y colectivos. El 91% de las muertes entre 2004 y 2009 corresponden a desmovilizados colectivos. Alta Consejería para la Reintegración, informe interno, abril de 2009.

²⁵ MAPP/OEA, "MAPP/OEA, "Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 31 de octubre de 2007.

²⁶ Alta Consejería para la Reintegración, informe interno, Op. Cit.

²⁷ Entrevista con oficiales de la fuerza pública, 3 de junio de 2009.

²⁸ Liderada por un grupo de mandos medios con vínculos al antiguo comandante del Bloque Norte de la AUC Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", la banda de Los Cuarenta fue desarticulada para luego ser absorbida por la organización de Los Mellizos. La captura de alias Salomón en abril de 2007, uno de los líderes de la banda, y la fuga sus sucesores a Venezuela desarticuló la línea de mando. Sus subalternos, como alias Yordy, escolta de Salomón, fueron cooptados por Los Mellizos. Verdadabierta.com, "La banda que heredó el imperio de Jorge 40", 21 de Octubre de 2008. Entrevista con oficial de la fuerza pública, 3 de junio de 2009.

²⁹ Entrevista con experto en seguridad, 26 de marzo de 2009. Entrevista con oficial de la fuerza pública, 3 de junio de 2009.

³⁰ Entrevista con oficial de la fuerza pública, 21 de mayo de 2009.

³¹ Entrevista con oficial de la fuerza pública, 3 de junio de 2009.

³² MAPP/OEA, "Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 30 de agosto de 2006.

³³ MAPP/OEA, "Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente Sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 14 de febrero de 2007.

³⁴ MAPP/OEA, "Decimoprimer Informe", Op. Cit.

³⁵ MAPP/OEA, "Noveno Informe", Op. Cit.

³⁶ MAPP/OEA, "Séptimo Informe", Op. Cit.

³⁷ MAPP/OEA, "Decimoprimer Informe", Op. Cit.

³⁸ El Tiempo, "Gobierno no tiene pista de 4.731 reinsertados, denuncia consejero para la reintegración, Frank Pearl", 13 de febrero de 2007.

³⁹ Durante el primer semestre de 2007, se registró el surgimiento de la organización liderada por Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias "Los Mellizos", la cual buscó consolidar su presencia en zonas antiguamente lideradas por otros grupos de autodefensa como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Bajo Cauca, y el sur de Bolívar. Durante este período también se registró la captura de Ever Veloza, alias "H.H." y el surgimiento de la organización liderada por Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario" con base en Urabá.

⁴⁰ El País, "Reseña Nacional", 31 de marzo de 2009.

⁴¹ Entrevista con miembros de la fuerza pública. Bogotá, 3 de junio de 2009.

⁴² Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal, “Informe Control y Monitoreo Desmovilizados Colectivos e Individuales”, enero de 2009.

⁴³ Alta Consejería para la Reintegración, informe interno, abril de 2009.

⁴⁴ Instituto Popular de Capacitación, “Medellín abre debate sobre futuro del proceso de reinserción de las Auc”, 9 de abril de 2008.

⁴⁵ El Espectador, “Bajo protección testigos de proceso de alias Memín”, 4 de diciembre de 2008.

⁴⁶ MAPP/OEA, “Decimosegundo Informe”, Op. Cit.

⁴⁷ Jhon Freddy Manco Torres, alias “El Indio” o “Alberto”, segundo al mando de la organización de Don Mario, fue detenido el 5 de agosto, en Cartagena. Torres había participado en los proyectos productivos liderados por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior, lo cual le facilitó mantenerse en contacto con los desmovilizados antes de retornar a la ilegalidad. Acción Social- Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado, “Bitácora de eventos Semana” 12 y 18 de abril de 2008. El Espectador, “‘El poder detrás del poder’ era ‘el Indio’ en banda de ‘Don Mario’, revela dossier de la Policía”, 4 de marzo de 2009.

⁴⁸ Al sur del departamento, en la frontera con las sub-regiones del Bajo Cauca, el Norte y el Urabá antioqueños se encuentra el Nudo de Paramillo, una región montañosa que da origen a las serranías de Abibe (noroeste), Ayapel (norte-nordeste) y San Jerónimo (norte) y a las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge. Víctor Negrete (ed.): El Parque Nacional Natural de Paramillo, Montería: Fundación del Sinú, octubre de 1992, pp. 9-10.

⁴⁹ En las estribaciones del Nudo de Paramillo se comercializa principalmente la pasta de coca, para luego ser procesada en laboratorios, o “cristalizaderos”, en zonas del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. La zona de Tolú y Coveñas también ha sido identificada como puerto de embarque de cargamentos de droga por lancha rápida hacia Panamá y zona de recepción de cargamentos de armas. Entrevista con oficial de la fuerza pública, 20 de mayo de 2009.

⁵⁰ A 31 de diciembre de 2007, Córdoba contaba con 1.858 hectáreas de coca, concentradas en los municipios de Montelíbano (20%), Tierralta (22%) y Puerto Libertador (28%). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), “Cultivos de Coca Estadísticas Municipales Censo 2007”, 31 de diciembre de 2007, pp. 43-45.

⁵¹ Los valles del Sinú y del San Jorge, al norte y centro del departamento, están compuestos por grandes extensiones de zonas planas las cuales constituyen alrededor del 60% del departamento. Gobernación de Córdoba, “Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011”, Montería, mayo de 2008, pp. 18-21.

⁵² Según datos de la Pastoral Social, se calcula que la población desplazada del departamento habría abandonado más de

60.800 hectáreas, siendo Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano los municipios más afectados. Alejandro Reyes: *Guerreros y Campesinos El Despojo de la Tierra en Colombia*, Bogotá: Norma, 2008, pp. 158-159.

⁵³ Diferentes jefes paramilitares, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, Ever Veloza, alias “H.H”, Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche” y la familia Castaño, tuvieron extensiones considerables de tierra en la región. Según fuentes locales, Macaco le habría disputado tierras a Vicente Castaño y a Salvatore Mancuso, las cuales hoy están en proceso de extinción de dominio. Alejandro Reyes, Op. Cit., p. 151.

⁵⁴ Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, “Diagnóstico Departamental Córdoba”, 2008, p. 4.

⁵⁵ El Bloque Córdoba emergió de las ACCU. Estaba conformado por la Escuadra Móvil con jurisdicción en Tierralta y Valencia, el Frente Alto San Jorge, liderado por Juan María Lezcano, alias “El Pollo Lezcano”, con jurisdicción en Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica, La Apartada, Buenavista y Ayapel, el Frente Abibe, con jurisdicción el Valencia y Tierralta, y el Grupo Urbano, con presencia en Montería Cereté, Ciénaga de Oro, Sahún y San Carlos. Víctor Negrete, “Situación de Conflicto y Pobreza en el Departamento de Córdoba”, Acción Contra el Hambre, noviembre de 2008, p. 33. Sin embargo, en el momento de desmovilización éstas se presentaron como los Bloques Sinú y San Jorge, así como el Bloque de Sanidad. Juan Carlos Garzón, “Desmovilización de los Bloques Sinú, San Jorge y Sanidad de las AUC”, Fundación Seguridad y Democracia, 3 de marzo de 2005.

⁵⁶ El Bloque Héroes de Tolová, liderado militarmente por Manuel Arturo Salóm Rueda, alias “JL”, habría llegado a tener presencia en Montería, así como en zonas del departamento de Antioquia como Apartadó, San Pedro de Urabá y Turbo. Fiscalía General de la Nación, documento interno, 17 de junio de 2009.

⁵⁷ El Bloque Mineros tuvo presencia en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel, mientras el Bloque Elmer Cárdenas estuvo presente en Canalete, Los Córdoba, Arboletes y San Juan de Urabá. Víctor Negrete, “Situación de Conflicto”, Op. Cit.

⁵⁸ MAPP/OEA, “Séptimo Informe” Op. Cit. Según informes de prensa el principal líder de los Traquetos habría sido Albeiro Gómez Martínez, alias “Cobra”, desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová y el segundo cabecilla sería Benjamín José Alvarado Bracamonte, alias “Juancho Bracamonte”, quien habría sido un hombre cercano a Mancuso, y líder de la milicias urbanas de las ACCU en Tierralta. El Tiempo, “Explosión De ‘Bandas Emergentes’”, 10 de diciembre de 2006. El Herald, “Mancuso declaró ante fiscal”, 13 de octubre de 2005.

⁵⁹ Según informes de prensa, el segundo al mando de la banda sería Deneil Enrique Acosta Ballesteros, alias “R-20”, desmovilizado del Bloque Córdoba de las AUC, a quien la Policía aprehendió en el municipio de Valencia el 27 de

enero de 2007. ANNP, "La Policía Nacional capturo a uno de los integrantes de la banda vencedores del San Jorge", 30 de enero de 2007.

⁶⁰ MAPP/OEA, "Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)", 16 de febrero de 2006.

⁶¹ Informes de la fuerza pública señalaron en abril de 2008, a Francisco Javier Silva Vellejo, alias "Julián" o "Montoya", como el principal cabecilla de la banda de los Paisas. Esta estructura operaría por medio de tres comisiones: una en la zona central del departamento, una en la zona norte y una en la zona noroccidente. Ejército Nacional – XI Brigada, Informe sobre Bandas Emergentes, abril de 2008.

⁶² Ejército Nacional – XI Brigada, Op. Cit. Policía Nacional, Documento Interno, abril de 2009.

⁶³ Esta estructura ha recibido diferentes denominaciones. En primera instancia se denominó como Héroes de Castaño, haciendo alusión a la posible intención por parte de Don Mario de vengar la muerte de Carlos Castaño a manos de una facción de las AUC cercanos a organizaciones del narcotráfico. También se autodenominaron como Águilas Negras de Urabá, y durante el segundo semestre de 2008 distribuyeron panfletos en departamento en las cuales se hacían llamar Autodefensas Gaitanistas.

⁶⁴ Informes de la fuerza pública presentados en abril de 2008 muestran como el tercer cabecilla de la estructura de Don Mario, alias "Juan Carlos", actuaría como jefe de seis comisiones divididas lideradas por un cabecilla. Cada comisión se encargaba de un municipio: Canalete, Los Cordobas, Zapindonga, Montería, y San Juan de Urabá. El encargado de la comisión de Montería habría sido Luis Alberto del Toro Almanza, alias "Galeón", desmovilizado del Bloque Córdoba, quien sería capturado el 1 de marzo de 2008. Galeón habría sido comisionado por Don Mario para consolidar rutas hacia la zona costanera del departamento. El Universal, "Cayó alias "Galeón", hombre de confianza de "Don Mario", 1 de marzo de 2008. Ejército Nacional – XI Brigada, Op. Cit.

⁶⁵ Ejército Nacional – XI Brigada, Op. Cit. Policía Nacional, Documento Interno, Op. Cit.

⁶⁶ Entrevista con miembro de la fuerza pública, 21 de mayo de 2009.

⁶⁷ La organización de delincuencia organizada estaría al mando de Ericsson Vargas Cardona, alias "Sebas" y estaría dirigiendo grupos en Medellín, Envigado y Chocó. El Tiempo, "Fabio León Vélez, 'Nito', es el contacto de la 'Oficina de Envigado' con los carteles mexicanos", 4 de mayo de 2009.

⁶⁸ ONUDD, Documento Interno, 20 de abril de 2009.

⁶⁹ Policía Nacional, Documento Interno, Op. Cit.

⁷⁰ Bracamonte fue incluido en la lista de los más buscados en el departamento en Junio de 2006. ANNP, "Los diez más buscados del departamento", 22 de junio de 2006.

⁷¹ Fiscalía General de la Nación, Informe Interno, Op. Cit.

⁷² El Universal, "Las bandas criminales estarían detrás de crímenes en Tierralta", 2 de febrero de 2008.

⁷³ Cesar Molineros, "El nudo que rodea el Paramillo", Revista Semana, 26 de febrero de 2008.

⁷⁴ Según informes de la Defensoría del Pueblo, "la tipología de las víctimas correspon[dió] a personas relacionadas de alguna manera con el proceso de desmovilización: el familiar de quien cedió unos terrenos para proyectos productivos con desmovilizados, el propietario de varias estaciones de gasolina y embarcaciones que al parecer transportaban erradicadores hacia la zona rural de Tierralta (corregimiento de Crucito), comerciantes y personas conocedoras de rutas y contactos para el negocio ilícito, entre otros". Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado - Sistema de Alerta Temprana, Informe de Riesgo n° 030-06, 19 de julio de 2006. Entre las víctimas se encontraba Andrés Assías, hijo del ganadero Arán Assías, presunto testaferro de Salvatore Mancuso, quien cedió tierras para proyectos productivos de los desmovilizados y Jorge Enrique Samudio Molina, alias "El Paisa", desmovilizado del Bloque Córdoba, quien según informes de prensa habría estado ligado al tráfico de estupefacientes en el Alto Sinú. El Tiempo, "Detenidos 13 miembros de una banda dedicada a asesinar a desmovilizados del bloque de Mancuso", 18 de julio de 2006. El Tiempo, "¿Se Desatan Otras Vendettas 'Paras?'", 5 de julio de 2006.

⁷⁵ El 2 de noviembre de 2006, los guerrilleros atacaron las instalaciones de la Policía en Tierradentro, corregimiento de Montelíbano, y proferieron amenazas contra la población civil por apoyar a los grupos de autodefensas. Martha Ruiz, "En Tierradentro: Una alerta temprana que funcionó muy tarde", Semana, 2 de noviembre de 2006.

⁷⁶ El 3 de abril de 2007 se da captura a Ever Veloza, alias "H.H.", comandante del Bloque Bananero de las AUC y hombre de confianza de Vicente Castaño, quien habría estado involucrado en la conformación de estructuras armadas post-desmovilización en Meta y Vichada. Ministerio de Defensa, "Capturado alias "HH" ex cabecilla prófugo de las autodefensas ilegales", 3 de abril de 2007.

⁷⁷ En febrero de 2006, el Ejército tuvo un combate con la estructura de los Vencedores de San Jorge en la vereda el Tambo corregimiento de Puerto Anchica - donde fueron dados de baja 3 presuntos paramilitares, dos de ellos reportados como N.N. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, 3 de julio de 2007. Entre agosto y diciembre de 2006 la Policía reportó la captura de 66 miembros de las estructuras de los Vencedores de San Jorge y Los Traquetos (la mayoría pertenecientes a este último). ANNP, "Quinto informe", Op. Cit.

⁷⁸ El 27 de enero de 2007, fue capturado en Valencia, Deneil Enrique Acosta Ballesteros, alias "R-20" segundo cabecilla de los Vencedores de San Jorge. A su vez, el 15 de abril de 2007 fue capturado en Cartagena, Albeiro Manuel Gómez, alias "Cobra", supuesto líder de Los Traquetos.

⁷⁹ La MAPP/OEA recibió información de que algunos desmovilizados estarían siendo reclutados en Córdoba para ser transportados a la Sierra Nevada de Santa Martha.

MAPP/OEA, "Noveno Informe" Op. Cit.

⁸⁰ Según informes de la fuerza pública, la estructura de Don Mario habría absorbido algunas facciones de la estructura de Los Traquetos.

⁸¹ Defensoría del Pueblo, documento interno, octubre de 2008.

⁸² El Tiempo, "Cuatro muertos en incursión de grupo armado en la vereda Buenos Aires (Córdoba)", 19 de marzo de 2008.

⁸³ El Tiempo, "Masacre de Puerto Libertador fue por retaliación de 'Don Mario' contra 'Los Paisas'", 2 de agosto de 2008.

⁸⁴ El Tiempo, "Investigan posible negligencia policial en masacre de San José de Uré (Córdoba)", 10 de noviembre de 2008.

⁸⁵ Según la Fiscalía, Julián recibía órdenes desde Medellín de miembros de la oficina de Envigado conocidos como alias "Terry" y alias "Parcero". Fiscalía General de la Nación, "Asegurados Jefes de Los Traquetos y Los Paisas", 6 de marzo de 2008.

⁸⁶ Caracol, 10 de octubre de 2008. El Meridiano de Córdoba, 9 de agosto de 2008.

⁸⁷ El Tiempo, "Amenazas de grupos paramilitares paralizaron a Tierralta y Puerto Libertador (Córdoba)", 17 de octubre de 2008.

⁸⁸ Entrevista con miembro de la fuerza pública, 21 de mayo de 2009.

⁸⁹ Entrevistas con miembros de la fuerza pública, 21 de mayo y 3 de abril de 2009.

⁹⁰ Víctor Negrete, "Córdoba en emergencia: la actual fase del conflicto y la necesidad de crear un movimiento ciudadano", Centro de Estudios Sociales y Políticos - Universidad del Sinú, Montería, 15 de julio de 2009.

⁹¹ Entrevista con oficiales de la fuerza pública, 21 de mayo y 3 de junio de 2009.

⁹² Estimativos de CITpax con base en datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

⁹³ De 2005 a 2006, el número de homicidios aumentó de 46 a 56 en Montería, de 14 a 43 en Montelíbano y de 31 a 46 en Tierralta. Datos Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

⁹⁴ De 2006 a 2007, el número de homicidios aumentó de 56 a 73 en Montería, de 43 a 45 en Montelíbano y de 46 a 60 en Tierralta. Datos Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

⁹⁵ Datos Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

⁹⁶ Según cifras oficiales, el 80% de los homicidios entre 2003 y 2007 en Córdoba fueron cometidos con armas de fuego. Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, "Diagnóstico Departamental Córdoba", Op. Cit., p. 12. Adicionalmente mientras el 77% de las 18.051 armas entregadas por las autodefensas eran largas, el 49% de las 6.673 armas incautadas a las bandas emergentes entre 2005 y mayo de 2009, eran armas cortas. Entrevista con

oficial de la fuerza pública, 3 de junio de 2009.

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado - Sistema de Alerta Temprana, Informe de Riesgo n° 030-06, 19 de julio de 2006.

⁹⁹ Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado - Sistema de Alerta Temprana, Nota de Seguimiento n° 004-08, 20 de febrero de 2008.

¹⁰⁰ Datos Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

¹⁰¹ Según el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, casi 500 desplazados solicitaron protección de más de 24.300 hectáreas que abandonaron en el departamento. Los municipios de mayor abandono de tierras y solicitudes de protección son: Tierralta, con 11.800 hectáreas, Montería con 5.300, Puerto Libertador con 1.700 y Montelíbano con 1.600. Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio - Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, "Áreas Protegidas", julio de 2008, citado en Víctor Negrete, "Situación de Conflicto", Op. Cit., p. 94.

¹⁰² En 2008, miembros de Los Traquetos habrían ofrecido a algunos desplazados comprarles su tierra a un precio justo a cambio de no denunciar los predios que en el momento se encontraban en posesión de Don Berna y su red de testaferros. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, "Decimoprimer Informe", Op. Cit.

¹⁰³ El 6 de junio de 2008, por información de un cooperante, la Fiscalía allanó un apartamento en Montería donde encontró archivos sobre la red de testaferros y las propiedades del recién extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Revista Cambio, "¿Quiénes aparecen en la caleta de Mancuso?", 11 de junio de 2008. En octubre de 2008, la Fiscalía empezó el proceso de extinción de dominio de 140 bienes pertenecientes a Don Mario a través de una red de testaferros. Algunas de las propiedades se encontraban en Tierralta. El Tiempo, "Fiscalía ocupó 154 bienes de Daniel Rendón Herrera 'Don Mario', evaluados en 100 millones de dólares", 28 de octubre de 2008. En marzo de 2009, la Fiscalía anunció la ocupación de bienes en Valencia y Tierralta de Jimmy de Jesús Benítez Contreras, alias "Jimmy", miembro de la estructura de los Traquetos y ahora parte de Los Paisas. El Espectador, "Ocupan 63 bienes de la banda 'Los Traquetos'", 14 de marzo de 2009.

¹⁰⁴ En 2005 se registraron 1.105 expulsiones, incrementando un 35% a 1.717 en 2006, y un 55% adicional para llegar a 2.822 en 2007. Datos Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, marzo de 2009.

¹⁰⁵ Por razones de seguridad, tanto los desmovilizados activos, como los reincidentes prefirieron no divulgar los nombres de los comandantes de la zona.

¹⁰⁶ Cifras de Centro de Servicios de Montería citadas en Víctor Negrete, "La Desmovilización", Op. Cit.

¹⁰⁷ Alta Consejería para la Reintegración, Presentación, Córdoba, abril de 2008.

¹⁰⁸ Dean Pruitt et al.: "Conflict Escalation", en *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, New York: McGraw Hill College, 1994, pp. 86 y 102.

¹⁰⁹ Ibid. p. 79.

¹¹⁰ En un informe de mayo de 2008, la Procuraduría General de la Nación afirmó que de los más de 180 desmovilizados asesinados en Antioquia, Magdalena, Cesar, Córdoba y Santander durante el 2007, un número significativo habría muerto al haberse negado a formar parte de los bandas emergentes. Procuraduría General de la Nación, "Proyecto Control Preventivo y de Seguimiento a las Políticas Públicas para el otorgamiento de Beneficios a la Población Desmovilizada y Reincorporada a la Vida Civil Componente de Beneficios Administrativos", Resumen Ejecutivo, mayo de 2008, p. 45. Según fuentes de prensa, a finales del 2007 varios desmovilizados, como Rafael Orozco Martínez, alias 'Bigote', de 45 años, desmovilizado del Bloque Córdoba, Ezequiel Segundo Vidal Lara y Hernando Ortiz Velasco, del mismo bloque habrían sido abordados por otros desmovilizados quienes les ofrecieron formar parte de nuevas estructuras armadas. Sin embargo existen casos como el de Erika Ospina López, desmovilizada del Bloque Vencedores de Arauca, y el de Juan Carlos Fernández González, desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas, quien conducía un taxi, en los cuales es difícil afirmar que no pertenecían a ninguna estructura delincuencial o armada. Gudilfredo Avendaño, "Por No Entrar A Bandas Emergentes, Mataron A 18 Ex Paras En Un Mes", El Tiempo, 30 de noviembre de 2007.

¹¹¹ Con el objetivo de prohibir la participación de desmovilizados en operativos militares, el Ministerio de Defensa emitió una resolución el 25 de julio de 2007. MAPP/OEA, "Decimoprimer Informe", Op. Cit.

¹¹² Ejército Nacional – XI Brigada, Op. Cit. Policía Nacional, Documento Interno, Op. Cit.

¹¹³ Entrevista con oficial de la fuerza pública, 21 de mayo de 2009.

¹¹⁴ Víctor Negrete Barrera, "La desmovilización de las AUC o el Principio de Otro Proceso de Violencia que está en Consolidación" Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú, Montería, 12 de abril de 2009.

¹¹⁵ ANNP, "Capturados ocho miembros de bandas criminales", 6 de junio de 2008.

¹¹⁶ Corte Constitucional, Op. Cit.

¹¹⁷ "Atención de Riesgos", en Alta Consejería para la Reintegración, http://www.reintegracion.gov.co/ruta_reintegracion/atencion.html (15.6.2009).

¹¹⁸ Alta Consejería para la Reintegración, "Orientación y Apoyo en Casos de Riesgo Córdoba 2008", Presentación Consejo de Seguridad, Tierralta Córdoba, 26 de abril de 2009.

¹¹⁹ Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, abril de 2009.

¹²⁰ Barbara F. Walter: "The Critical Barrier to Civil War Settlement", en *International Organization*, Vol. 51 No. 3,

Summer, pp. 335-364. Barbara F. Walter: *Committing to Peace. The Successful Settlement of Civil Wars*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

¹²¹ El Espectador; "El peso de la ley caerá sobre militares involucrados con 'narcos': Santos", 17 de abril de 2008.

¹²² El Tiempo, "Investigan posible negligencia policial en masacre de San José de Uré (Córdoba)", 11 de noviembre de 2008.

¹²³ El Tiempo, "Teniente de la Policía de Córdoba trabajaba para la 'Oficina de Envigado'", 19 de junio de 2009.

¹²⁴ Comunicación con personal de la Alta Consejería para la Reintegración, junio de 2009.

¹²⁵ De los 140 de quienes no se tienen datos desde julio de 2008, se estableció por información pública que por lo menos 35 son, o fueron, postulados a la ley de Justicia y Paz; un número sin establecer estarían recluidos en la penitenciaría de Urrá, localizada en Tierralta. Adicionalmente, se pudo constatar por fuentes de prensa que por lo menos 15 habrían sido relacionado con algún tipo de actividad delictiva desde 2006. No se pudieron encontrar datos sobre 90 de ellos. Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, abril de 2009.

¹²⁶ Esta cifra excluye a los desmovilizados que hayan sido capturados o hayan fallecido antes o durante el período mencionado, así como a los 140 desmovilizados de los cuales no se tiene dato desde julio de 2008. Se trató de diferenciar entre los participantes del municipio de Valencia y los del municipio de Tierralta, ambos adscritos al Centro de Servicios de Tierralta, utilizando datos del Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación (SAME) de la ACR sobre la localización de los desmovilizados. Estas cifras son solo aproximaciones, pues no es posible certificar la localización exacta de los participantes del proceso. Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, abril de 2009.

¹²⁷ Stathis Kalyvas: *Logic of Violence in Civil Wars*, New York: New York University, 2000.

¹²⁸ Testimonio al respecto de un desmovilizado tierraltense: "Cuando amenazan, tiene que irse uno. Aquí no vale policía ni nada, no, no, es mejor irse uno para su grupo otra vez, para defenderse. [...] Me tocaría ir, sin ganas ya, sino ¿hacer qué? Matar gente. A mi no me gustaría." (Entrevista con desmovilizado de Tierralta, 30 de abril 2009).

¹²⁹ El mayor número de capturas se evidenció en 2006 con 61 desmovilizados detenidos, mientras en 2007 la cifra bajó a 48. Esto se explica en mayor medida a raíz del bajo perfil que adoptaron las estructuras luego de la ofensiva militar y policial contra ellas durante 2006, así como de su proceso de reacomodamiento. Alta Consejería para la Reintegración (ACR), Presentación, Op. Cit.

¹³⁰ Es importante anotar que de los 275 desmovilizados capturados en Córdoba entre 2005 y abril 2009, la ACR reportó que un 15% ya habrían quedado en libertad. Alta Consejería para la Reintegración, Informe Interno, Op. Cit.

¹³¹ Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, abril de 2009.

¹³² Departamento de Policía de Córdoba – Policía Nacional de Colombia, Op. Cit.

¹³³ El caso de Agustín de Jesús Sánchez es refleja esta tendencia. Desmovilizado del Bloque Centauros de las AUC y, según las autoridades, cercano a Carlos Castaño, Sánchez habría intentado conformar estructuras en el departamento del Tolima, para luego regresar al municipio de Tierralta., antes de su captura en junio de 2008. EL Universal, “Cayó en Córdoba uno de los más buscados en el Tolima”, 24 de julio de 2008.

¹³⁴ MAPP/OEA, “Noveno Informe Trimestral”, Op. Cit.

¹³⁵ Es importante anotar, que la totalidad de los desmovilizados que han llegado ha participado de manera regular en las actividades de la ACR. Estimativos de CITpax con base en datos de la Alta Consejería para la Reintegración, abril de 2009. Datos proporcionados por la ACR, abril de 2009 y procesados por CITpax.

¹³⁶ Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, “Décimo Segundo Informe Trimestral”, 9 de febrero de 2009, p. 6.

¹³⁷ Según un estudio, el 14 por ciento entre desmovilizados colectivos e individuales fue reclutado bajo fuerza o amenaza. Ana Arjona y Stathis Kalyvas: *Preliminary Results of a Survey of Demobilized Combatants in Colombia*, Yale University, 2006, p. 32.

¹³⁸ Gustavo Dúncan, “Paramilitares Puros e Impuros”, Fundación Seguridad y Democracia, 2006.

¹³⁹ Según un estudio con excombatientes de las AUC, el 43% de los desmovilizados colectivos se unido a las filas paramilitares por promesas de dinero o bienes y el 15 por ciento para escapar de la pobreza extrema. Ana Arjona y Stathis Kalyvas: *Preliminary Results of a Survey of Demobilized Combatants in Colombia*, Yale University, 2006, p. 32. En otro estudio, el 3 por ciento de los colectivos dijeron que se fueron con los paramilitares para escapar de una amenaza. Kimberly Theidon y Paola Andrea Betancourt: “Transiciones Conflictivas: Combatientes Desmovilizados en Colombia”, en *Análisis político* n° 58, Bogotá, septiembre-diciembre, 2006, p. 101.

¹⁴⁰ La importancia de los mandos medios se observa en varios casos de DDR en el mundo. Antiguos mandos medios cumplen a menudo la tarea de intermediar entre los empresarios de violencia y los combatientes rasos en épocas de rearme. Stockholm Initiative, Swedish Government, Ministry for Foreign Affairs: *Stockholm Initiative on Disarmament, Demobilisation and Reintegration. Final Report*, Stockholm: Rolf, 2006, p. 19. Anders Nilsson: *Dangerous Liaisons. Why Ex-Combatants Return to Violence. Cases from the Republic of Congo and Sierra Leone*, Uppsala: Västra Aros, 2008, p. 171.

¹⁴¹ Incluye desmovilizados capturados que se encuentran en instituciones carcelarias del INPEC, así como algunos que ya han salido libres y otros de los que no se tiene registro.

¹⁴² Según la definición de la ACR, son considerados inactivos los desmovilizados que no participen en ninguna de las actividades del programa de reintegración durante tres

meses consecutivos.

¹⁴³ El Universal, “Asesinan a ex personero de Tierralta”, 16 de enero de 2008. El Tiempo, “Asesinan a gerente de proyectos productivos en Tierralta, Córdoba”, 19 de junio de 2008.

¹⁴⁴ En julio de 2007, la MAPP/OEA reportó que los tutores psicosociales de la ACR en Córdoba, Bajo Cauca, Norte de Santander y Urbana estarían en situación de vulnerabilidad frente a las bandas emergentes. MAPP/OEA, “Noveno Informe Trimestral”, Op. Cit.

¹⁴⁵ Caracol, “Cierran centro de servicios para desmovilizados por irregularidades”, 21 de abril de 2008.

¹⁴⁶ Alta Consejería para la Reintegración, Comunicado, 1 de abril de 2009.

¹⁴⁷ Con base en encuestas con desmovilizados reincidentes, la MAPP/OEA afirmó que casi el 50% de los entrevistados coincidió en que la razón primordial que los llevó a reincidir en el delito fue el control poblacional y territorial que ejercen las estructuras armadas y delincuenciales en sus zona de residencia y la falta de presencia institucional. MAPP/OEA “Decimosegundo Informe Trimestral”, Op. Cit.